

# **ASADIP- JÓVENES INVESTIGADORES/AS**

## **2022**

**Paula María ALL  
Valesca RAIZER BORGES  
Nieve RUBAJA**

**Coordinadoras**





All, Paula Maria

Jornadas de Jóvenes Investigadores de la ASADIP 2022 / Paula Maria All. - 1a ed  
- Santa Fe : Paula Maria All ; Buenos Aires : Nieve Rubaja ; Vitória : Valesca Raizer  
Borges, 2024.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-631-00-4889-5

I. Derecho Internacional Privado. I. Título.

CDD 341.02



ASADIP 2024  
ISBN: 978-631-00-4889-5

Edición: Julia Gaviola / Paula María All

# ÍNDICE

Presentación	01
<b>ALL , Paula Maria / RUBAJA, Nieve / RAIZER BORGES, Valesca</b>	
Ejes temáticos, categorías y Comité Evaluador	03
Categoría A -	05
Estudiantes avanzados/as de la carrera de Derecho (hasta 30 años)	
A influência das tecnologias disruptivas na Online Dispute Resolution	06
<b>FERREIRA Adrícia</b>	
Os investimentos estrangeiros na construção de uma economia sustentável: o caso do Comprehensive Agreement on Investments entre a China e a União Europeia	12
<b>FONSECA COMETT Anna Karoliny</b>	

Medidas de harmonização dos meios de responsabilização das exchanges estrangeiras por danos causados a clientes investidores 17

**LOPES LOSS Isabela**

(In)efectividade da aplicação da Convenção da Haia de 1980: uma reflexão a partir da jurisprudência do STJ em casos de subtração internacional de crianças 22

**PONTES TELES, Gabriel**

Pensar más allá de la territorialidad: la influencia de la tecnología *Blockchain* en el Derecho de la Propiedad Intelectual 27

**REYNA, Rosario María**

A efetividade da aplicação das convenções internacionais para a responsabilização administrativa e para o combate à corrupção nos países que compõem o MERCOSUL 32

**SANT'ANA de OLIVEIRA Isabella**

Falência transnacional e adesão da Lei Modelo sobre Insolvência Transnacional da UNCITRAL no Brasil 37

**STEFONI FINALORE SIMONI Maria Victória / SALAZAR Davi / BRAGA Lucas**

A Convenção da Singapura sobre Acordos em Mediação Aplicada aos Contratos de Transporte Marítimo Internacional de Mercadorias e o Cenário Brasileiro 43

**ZAQUI MILAGRE Amanda**

CATEGORIA B - 49

Maestrandos/as (hasta 30 años)

Tribunal de Justiça da Comunidade Andina de Nações e o Direito do Consumidor Aéreo: um olhar à luz do Direito Internacional Privado 50

**MEDEIROS da COSTA Ida Geovanna / dos ANJOS BARROS Lívia**

CATEGORIA D - 56

Jóvenes docentes e investigadores/as (hasta 40 años)

*Online Dispute Resolution (ODR) como meio adequado de resolução de conflitos en matéria de consumo no MERCOSUL* 57

**HOLANDA PRESCHOLDT Gisele**

Los desafíos de la ley aplicable a los *Smart Contract* 62

**PEDRAZA Josefina / HUERGO Carlos Marcelo**

CATEGORIA E - 67

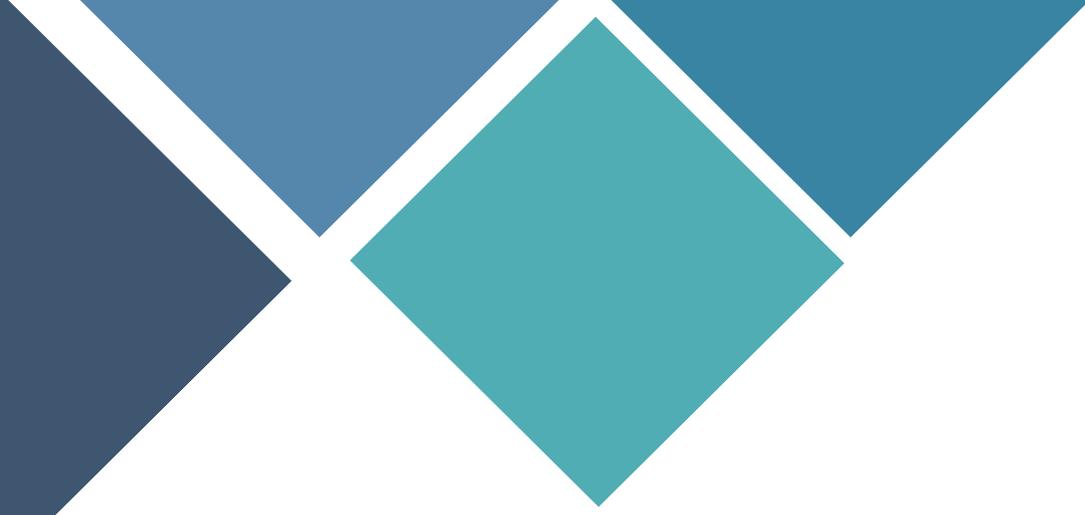
Graduados/as en Derecho (hasta 40 años)

¿Llegaron para quedarse las Sociedades BIC? 68

**PEREZ NIETO Paula Agustina**

Menciones Honoríficas 73

QR de videos y posters 74



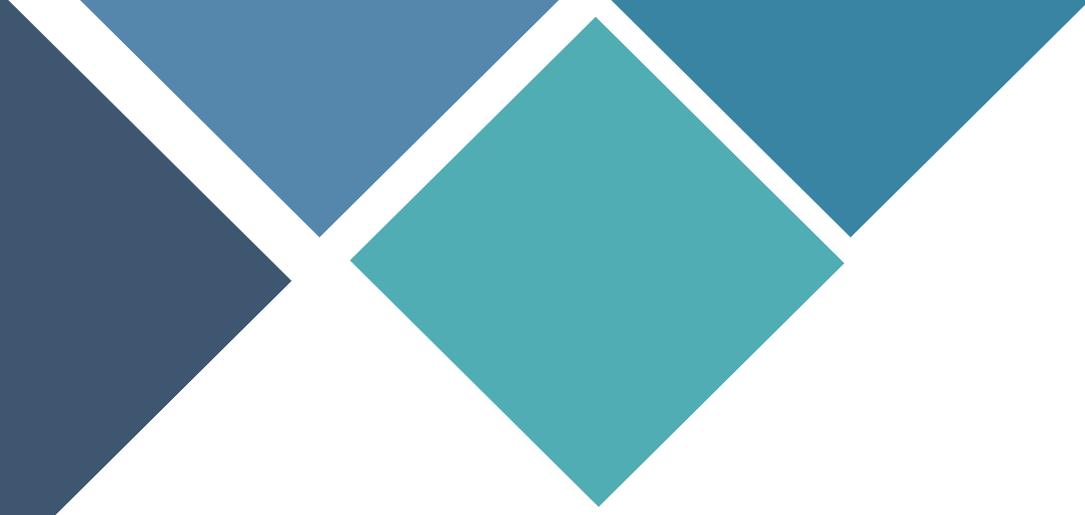
# PRESENTACIÓN

***Paula María ALL / Nieve RUBAJA / Valesca RAIZER BORGES***

La Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP) ha llevado a cabo su Jornada de Jóvenes investigadores/as 2022 con con la correspondiente convocatoria para la presentación de pósters de investigación y videos en el área del Derecho internacional privado. El objetivo de este espacio académico es acercar a los/las investigadores/as jóvenes a la ASADIP con un espíritu constructivo, a fin de que los mismos den a conocer los temas que están profundizando, sus trabajos de investigación, a la par de generar un intercambio de opiniones con los miembros del Comité Evaluador. Asimismo, se persigue que los/as jóvenes investigadores/as conozcan a los/las profesores/ras de Derecho internacional privado y a sus pares de otras Universidades de países de la región. Desde sus inicios la ASADIP ha tratado de generar y promover un espacio de conocimiento e intercambio respetuoso donde los/as jóvenes sean los protagonistas.

Esta publicación contiene los trabajos presentados en la Convocatoria 2022. En esta oportunidad se han postulado para participar 12 jóvenes investigadores/as de diferentes Universidades. Cada uno de ellos ha preparado un póster, una síntesis escrita y un video explicativo de 2 minutos de duración y, durante el Encuentro virtual de Jóvenes Investigadores/as de la e-ASADIP han podido responder las preguntas efectuadas por el Comité Evaluador y recibir comentarios por parte de lo/as profesores/as

El Comité Evaluador está conformado por profesores/as DIPr de la región, seleccionados por el Consejo de la ASADIP en función de su trayectoria en actividades de docencia, investigación y formación de recursos humano., La ASADIP agradece profundamente la amabilidad, predisposición y espíritu constructivo de los/las integrantes del Comité que se renueva año tras año con



su compromiso.

La ASADIP felicita muy especialmente a todos/as los/as participantes de estas Jornadas 2022 por su compromiso y seriedad en el abordaje de las tareas de investigación y a los/las directores/ras por su constante estímulo, compromiso y generosidad para la formación de sus dirigidos/as.

Año tras año, la ASADIP celebra este espacio de aprendizaje y de promoción del Derecho internacional privado y alienta a futuros jóvenes investigadores/as a sumarse a esta rica experiencia, como un paso constructivo más de su labor de investigación. Investigar tiene, en mayor o menor medida, sus luces y sus sombras, sus desafíos y sus complejidades pero, por sobre todo, implica analizar, debatir y contrastar ampliando la perspectiva, posibilitando una mirada que torna mucho más rico el análisis de un tema, no solo a los fines de comprender la complejidad de los problemas, sino para otorgar respuestas más humanitarias, justas y efectivas.

El dramaturgo español Calderón de la Barca decía “Quien vive sin pensar no puede decir que vive”, a lo cual el poeta Emerson podría agregar: “¿Cuál es la tarea más difícil del mundo? Pensar...”.

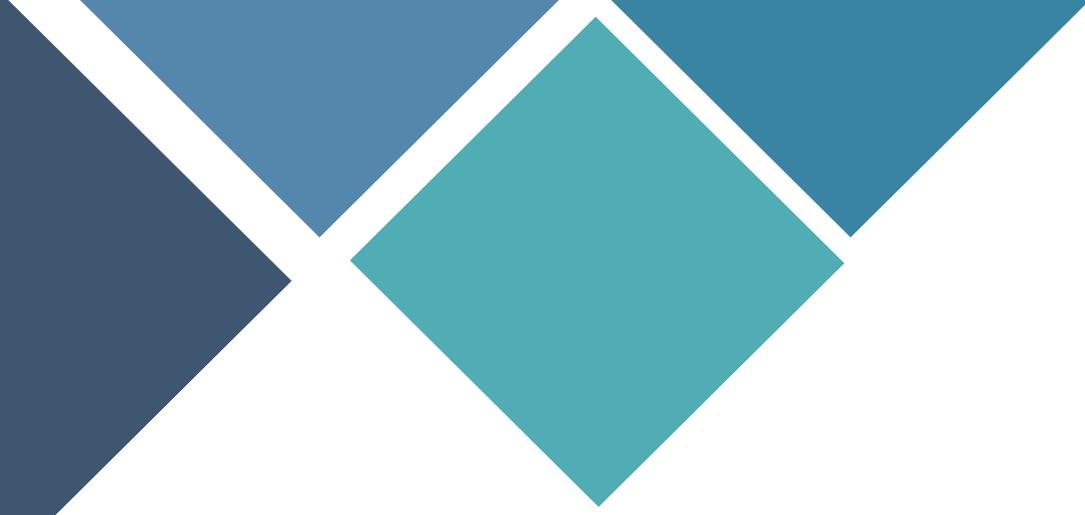
Quizás por eso considerar a la investigación como forma de enseñanza y de aprendizaje al mismo tiempo, es acercar también a los/as jóvenes al Derecho internacional privado de una forma tan reflexiva como crítica y apasionante. Las palabras de Borges en “Ficciones” pueden retumbar en los oídos de todos/as los/las que dan vida y forman parte de estas Jornadas de Jóvenes Investigadores/as de la ASADIP: “Pensar, analizar, inventar no son actos anómalos; son la normal respiración de la inteligencia”. Investigar es una forma de “intervenir” en los problemas que surgen a raíz de las relaciones jurídicas internacionales. Claro está que no hay recetas mágicas, y la aventura y el desafío implican responsabilidad, análisis, tenacidad, capacidad de intervención, y generación de propuestas con capacidad creativa, argumentativa y genuina ante las situaciones que se presentan. El deseo de la ASADIP es seguir fortaleciendo y consolidando este espacio académico con la sinergia de todos/as.

¡Muchas gracias a todos/as los/as protagonistas de estas Jornadas 2022!

**Paula María All**- Presidenta ASADIP

**Nieve Rubaja**- Vicepresidenta Académica

**Valesca Raizer Borges**- Vicepresidenta de Comunicaciones y Publicaciones



# Ejes, categorías y Comité Evaluador

## Ejes temáticos:

- Gobernanza global, Derechos Humanos y Derecho internacional privado
- Derecho internacional privado y Género
- Derecho internacional privado y Migraciones
- Derecho internacional privado para la protección de las familias y los derechos de los niños
- Derecho comercial internacional
- Empresas, Derechos Humanos y Derecho internacional privado
- Derecho procesal internacional
- Arbitraje e inversiones extranjeras
- Derecho internacional privado y tecnología
- Derecho internacional privado, metodología de la enseñanza e investigación
- Otros aspectos vinculados al Derecho internacional privado

## Categorías:

- A. Estudiantes avanzados/as de la carrera de Derecho (hasta 30 años)
- B. Mastrandos/as (hasta 30 años)
- C. Mastrandos/as (30 a 35 años) y Doctorandos/as (hasta 35 años)
- D. Jóvenes docentes e investigadores/as (hasta 40 años)
- E. Graduados/as en Derecho (hasta 40 años)



## Ejes temáticos, categorías y Comité Evaluador

El Comité Evaluador de los trabajos de las Jornadas de Jóvenes Investigadores/as de la ASADIP 2022 estuvo integrado por los/as siguientes profesores/as de Derecho internacional privado:

**Renata ALVARES GASPAR**

Universidad Federal de Uberlândia  
Brasil

**Guillermo ARGERICH**

Universidad de Buenos Aires  
Argentina

**Fabrizio BERTINI PASQUOT POLIDO**

Universidad de Minas Gerais  
Brasil

**María Laura CAPALBO**

Universidad de la República  
Uruguay

**Ana de LLANO**

Universidad de la República  
Uruguay

**Alfonso ORTEGA GIMÉNEZ**

Universidad M. Hernández de Elche  
España

**Fernando Pedro MEINERO**

Universidad Federal do Pampa  
Brasil

**María Susana NAJURIETA**

Universidad de Buenos Aires  
Argentina



## **CATEGORÍA A**

**Estudiantes avanzados de la Carrera de Derecho  
(hasta 30 años)**

# Tecnologias disruptivas e a resolução de disputas *online*

**Adrícia ROCHA FERREIRA**

Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil)

Directora: Raizer Borges, Valesca

Palavras chaves: Tecnologias, resolução de disputas *Online*, métodos adequados de solução de conflitos, *Blockchain*, inteligência artificial

## SÍNTESE DA APRESENTAÇÃO

A ascensão da tecnologia, em conjunto com a globalização, rompe com padrões e conceitos tradicionais, inclusive com aqueles característicos do estudo do direito internacional, trazendo consigo novos desafios.

Uma tecnologia disruptiva é aquela que proporciona um processo diferente e inovador, causando efeitos de mudança, de modo a redefinir as “regras do jogo”. A título de exemplo, temos: a internet, a inteligência artificial, o *machine learning*, o *blockchain*, as criptomoedas, os smart contracts, o e-commerce, entre vários outros. O estudo das tecnologias disruptivas, especificamente, se reflete em entender as inovações e suas conseqüentes rupturas, constituindo bases para os novos padrões criados, o desenvolvimento de regulações e sua manutenção.

No ambiente virtual, longas distâncias e fronteiras geográficas não são considerados obstáculos, o que provoca a expansão das interações. E, nesse mundo interconectado de relações facilitadas, observa-se um aumento no número de disputas originadas no ambiente digital. Não se pode deixar de considerar, entretanto, o desalinhamento entre recursos judiciais e a nova onda de casos na esfera virtual, cada vez mais frequentes. Nesse contexto, questiona-se como lidar o esmagador número de casos provenientes do mundo digital.

O constante surgimento de novas realidades vinculadas a última geração de tecnologias implica um grande desafio para o Direito, seus sistemas jurídicos e operadores. Diante de tantos avanços em curtos períodos de tempo, afirma ALBORNOZ (2020, p. 179) que “no es de extrañar que el derecho generalmente vaya un paso atrás de la tecnologia”. De todo modo, não se pode negar que em um mundo cada vez mais globalizado, o uso da tecnologia se torna

não só útil, como fundamental, proporcionando soluções para os conflitos que surgem a partir desta nova realidade; especialmente porque, nessa nova realidade, há uma demanda por soluções não convencionais para os conflitos resultantes.

A tecnologia apresenta diversas vantagens no contexto conflitual: internacionalidade, acessibilidade internacional, atemporalidade, descentralização, deslocalização, ateritorialidade, onipresença, intangibilidade, incorporealidade ou imaterialidade. (SCOTTI, 2016, p. 67-71).

Por outro lado, há uma (des)harmonia de regulações, desconfiança na tecnologia por parte da sociedade e também a falta de acesso em países emergentes, o que freia o avanço da aplicação da tecnologia (ALBORNOZ, 2020, p. 200).

Os métodos adequados de solução de conflitos despontam como viáveis e efetivos para a construção de acordos, cuja adesão e popularidade tem crescido nas últimas décadas, se apresentando como uma solução estratégica e eficiente para os litígios.

Facilmente adaptáveis ao ambiente *online*, são capazes, portanto, de expandir seu alcance além das fronteiras, se aproveitando da tecnologia para tornar o processo mais acessível e eficaz. Quando se trata de resolver um conflito em que o encontro presencial seria difícil por questões de custo e/ou tempo, o mundo virtual desempenha um papel importante.

Além disso, trazem a possibilidade de resolver conflitos originados no mundo digital, dentro do próprio mundo digital, consistindo em uma forma viável de lidar com a crescente demanda de casos de forma rápida (EVANS, 2019).

A online dispute resolution (ODR) combina a utilização de tecnologias com as técnicas alternativas, visando maior facilidade, alcance, rapidez e economia, e consistindo enquanto via efetiva para abordar as abundantes disputas do âmbito virtual. As técnicas mais comuns de ODR são a negociação tecnologicamente assistida, a mediação online e a arbitragem online.

Entre suas vantagens, citam-se: a adaptabilidade a diferentes contextos, eficiência, rapidez e economicidade, assim como a capacidade de contribuir para o desenvolvimento de economias emergentes.

No que concerne a contratempos ao seu desenvolvimento, a ODR normalmente lida com questões como: o desconhecimento dos mecanismos, de suas vantagens e funcionamento; da segurança das plataformas e suas ferramentas digitais em geral; da falta de acesso universal a serviços de Internet de qualidade gratuitos ou a preços razoáveis; assim como a cultura jurídica que prevalece no país de elevada propensão ao litígio, o que dificulta recorrer a métodos alternativos para resolver conflitos (ALBORNOZ, 2020, p. 200).

Cabe dizer que a nível internacional, ainda não existe um instrumento jurídico

vinculante que regule a solução de controvérsias *online*; sem embargo, pode-se citar alguns dos esforços que estão sendo empenhados como: a inclusão do tema na Conferência Interamericana de Direito Internacional Privado (CIDIP VII) e a proposta dos Estados Unidos de Guia Legislativo para uma Lei Interamericana sobre a disponibilidade de meios de solução de controvérsias e restituição a favor dos consumidores.

No cenário atual, há várias vantagens em utilizar tecnologias disruptivas em ODR, entre elas, o *blockchain*, os *smart contracts* e a Inteligência Artificial. O seu uso traz à tona uma noção ampla da resolução de disputas online, indo muito além de apenas facilitar a comunicação, mas consistindo enquanto verdadeira quarta parte no processo de resolução do conflito. Nesse contexto, as tecnologias podem auxiliar no planejamento das melhores estratégias e na tomada de decisões corretas, atuando enquanto assistentes; ou mesmo constituir em si o próprio mediador ou árbitro, atuando enquanto representantes das partes, executando um papel altamente ativo.

A utilização de *blockchain* em ODR traz diversas possibilidades, como: a redução do risco de descumprimento de contratos, e, conseqüentemente, o custo com a proteção de direitos; o fornecimento de um ambiente seguro para a preservação de evidências baseadas em *blockchain* e assistência inteligente; a intrínseca eficiência e rapidez para resolução diversificada do conflito, aliada com a autenticidade da decisão ou acordo.

É possível utilizar o *blockchain* para oferecer soluções preventivas para possíveis litígios, como consultoria de *compliance* de transações, assim como ambiente de depósito judicial de transações e evidências eletrônicas para instituições financeiras, instituições de propriedade intelectual e plataformas de comércio eletrônico.

Sua aplicação, portanto, constitui-se como um trunfo no jogo do conflito. Serviços inteligentes podem proporcionar, desde uma revisão rápida de evidências de casos a um julgamento rápido em casos semelhantes, ou até mesmo a aplicação de lei com base em *smart contracts*.

A inteligência artificial traz a automatização do processo de *decision-making*, aperfeiçoando o sistema e facilitando em casos de demandas repetitivas. A partir dela, surge a ideia de *Judge as a Service* (JaaS), na qual a máquina atuaria como um facilitador com poderes técnicos para reverter ou alterar transações realizadas através de *smart contracts* no contexto do *blockchain*, propondo uma forma mais harmônica de resolução de conflitos em ODR. (GONÇALVES, 2016)

Nesse contexto, o JaaS, dentre as condições estabelecidas através da sua programação, ponderaria dentro dos limites lógicos do *smart contract* assinado entre as partes, procurando facilitar a resolução de um impasse. Cita-se ainda o uso de mecanismos como *double blind bidding* e *visual blind bidding*, nos quais as exigências de cada parte são manifestadas sem o conheci-

mento da outra parte, deixando a cargo do algoritmo a avaliação das propostas e a tentativa de um acordo.

No contexto das Américas, há uma variedade de promissoras plataformas internacionais de resolução de disputas em desenvolvimento que se utilizam de tecnologias disruptivas.

A SAMBA (*Smart Arbitration & Mediation Blockchain Arbitration*), desenvolvida por universitários do *Miami Blockchain Group*, é uma plataforma baseada em tecnologia blockchain que busca gerenciar e facilitar procedimentos de arbitragem internacional de forma segura e eficiente, considerando tempo e custos.

A plataforma fornece um sistema de gerenciamento de casos, registra o histórico dos processos de disputa e codifica as regras do procedimento. Entre as vantagens, Vock e Baier (2018) citam a eficiência em termos de tempo e custos, a automação de procedimentos de disputa, a segurança e a confidencialidade baseados na tecnologia *blockchain* e a compatibilidade com a arbitragem “como a conhecemos”.

Por outro lado, os autores questionam se a tecnologia *blockchain* seria de fato necessária para o processo, especialmente enquanto uma plataforma de gerenciamento de casos. Em resposta, não se pode perder de vista que não há mais volta atrás para a inserção da tecnologia na realidade cotidiana. Nesse sentido, se há um sistema moderno e mais efetivo que possa influenciar

positivamente para a solução de disputas, por que não utilizá-lo?

Como parte do Programa 4.0 do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de Rio de Janeiro busca desenvolver um projeto pioneiro no Brasil: uma plataforma digital de mediação online que se utiliza de Inteligência Artificial. O sistema, inicialmente voltado para demandas de direito do consumidor, busca trazer celeridade, segurança e eficiência na resolução de conflitos pré-processuais. Dessa forma, a tecnologia atua enquanto mediador ou conciliador digital, oferecendo, ela mesma, alternativas e possíveis soluções.

A partir desse sistema, antes de iniciar um processo judicial, é apresentada ao consumidor a opção da mediação online, de modo que existe a possibilidade de aderir à iniciativa de forma voluntária ou prosseguir no sistema tradicional. Se aceito, o sistema faz uma análise do caso, em conjunto com as informações atualizadas pela outra parte (no caso, a empresa) no seu banco de dados, e oferece ao consumidor opções que podem facilitar a realização do acordo.

Verifica-se que muito ainda há que ser desenvolvido para haver uma efetiva integração da tecnologia, entretanto, já se pode perceber que despontam possibilidades promissoras. Não se pode perder de vista, entretanto, que existem ainda várias perguntas sem resposta, sobre como lidar com as limitações tecnológicas, assim como acerca dos impactos do uso da tecnologia, que devem ser melhor estudados em busca de atuações preventivas.

## REFERÊNCIAS

ALBORNOZ, María Mercedes, "Online Dispute Resolution (ODR) para el comercio electrónico em clave brasileña", in: MOSCHEN, Valesca; /LOPES, Inez, (Org.), *Desafios do direito internacional privado na sociedade contemporânea*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2020.

EVANS, Tonya M., "The Role of International Rules in Blockchain-Base Cross-Border Commercial Disputes".. *Wayne Law Review*, vol. 65:1., 2019.

GONÇALVES, Pedro Vilela Resende., "Blockchain, smart contracts e "Judge as a Service" no Direito brasileiro. Instituto de Referência em Internet e Sociedade (IRIS)", 2016. Disponível em: <https://irisbh.com.br/blockchain-smart-contracts-e-judge-as-a-service-no-direito-brasileiro/> Acesso em: 29/10/2022.

SCOTTI, L. B., *Derecho Internacional Privado. Globalización e Internet*, México, Porrúa, 2016.

VOCK, Dominik / BAIER, Jonatan., "Blockchain and Dispute Resolution: Current Projects. Conference Materials. "Blockchain, Smart Contracts and Arbitration", *ASA Conference*, Bern, 14 September 2018.

JÓVENES INVESTIGADORES/AS  
POSTER  
2022



**ASADIP**  
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE  
JÓVENES INVESTIGADORES/AS

Adriacia Rocha Ferreira - Brasil - UFES

# Tecnologias Disruptivas e a Resolução de Conflitos Online

Direito Internacional Privado e Tecnologia



**LABCODEX**  
LABORATÓRIO DE  
DIREITO PROCESSUAL INTERNACIONAL

### Perfil da Autora

Graduada em Direito na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Pesquisadora Voluntária no Programa Institucional de Iniciação Científica (PIC). Participante do Grupo de Pesquisa LABCODEX - Labirinto da Codificação do Direito Processual Internacional (UFES - CNPq). Coordenadora do Observatório de Decisões de Tribunais Internacionais de Direitos Humanos do LABCODEX. Monitora da disciplina de Direito Internacional Privado na UFES.

### Metodologia da Pesquisa

**Bibliográfica:** Leitura de livros e artigos científicos para entender o estado de arte da matéria. O referencial teórico é principalmente de autores como Maria Mercedes Albarnoz, Evans, Gonçalves, Scotti, Vock e Baier, etc.  
**Exploratória:** Busca por textos, instrumentos normativos e documentos que tratem dessa questão, assim como análise da prática jurisprudencial de casos relevantes porventura encontrados.  
**Documental:** Identificar os instrumentos jurídicos relevantes, convenções, acordos e tratados sobre o tema.

### Bibliografia

ALBARNOZ, María Mercedes. Online Dispute Resolution (ODR) para el comercio electrónico en clave brasileña. In: *NESTORA*. Valencia: IJOPES, Inc. (Ed.). *Estudios de derecho internacional privado en sociedades contemporáneas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.  
DIAZ, Tony K. The Role of International Rules in Blockchain-Based Cross-Border Commercial Disputes. *Wayne Law Review*, Vol. 63(1) 2019.  
GONCALVES, Pedro Vítor Bezerra. Blockchain, smart contracts e "Judge as a Service" no Direito brasileiro. Instituto de Referência em Internet e Sociedade (IRIS). 2016. Disponível em: <http://irislab.com.br/blockchain-smart-contracts-e-judge-as-a-service-no-direito-brasileiro/>. Acesso em: 21/03/2022.  
SCOTTI, L. B. *Direito Internacional Privado. Globalização e Internet*. Curitiba: Juruá, 2016.  
VICK, Daniel; BAIER, Jordan. Blockchain and Dispute Resolution Current Trends. *Conference Materials: Blockchain, Smart Contracts and Arbitration* ASA Conference, Bari, 14 September 2020.

### Reflexões

As inovações tecnológicas facilitaram o desenvolvimento de diversas outras áreas, e a hipótese é de que não seria diferente com os métodos adaptados para solução de conflitos.

Entretanto, questiono-se: seriam tecnologias como o *Blockchain* realmente necessárias para o processo de resolução de disputas, especialmente enquanto uma plataforma de gerenciamento de casos?

Em resposta, não se pode perder de vista que não há mais volta atrás para a inserção da tecnologia na realidade cotidiana. Se há um sistema moderno e mais efetivo que possa influenciar positivamente para a solução de disputas, por que não utilizá-lo?

Ainda há um longo caminho a percorrer no que concerne o uso das tecnologias disruptivas para auxiliar à resolução de disputas online. Apesar dos avanços na implantação das novas tecnologias, ainda há muitos questionos a serem discutidos para que se possam lidar com as limitações tecnológicas que o mundo virtual impõe.

### Plataformas de Resolução de Disputas com Base em Tecnologias Disruptivas nas Américas

A **ODR** (Smart Arbitration & Mediation Blockchain Arbitration) é uma plataforma baseada em tecnologia *Blockchain* que busca gerar e facilitar procedimentos de arbitragem internacional de forma segura e eficiente, considerando tempo e custos. A plataforma fornece um sistema de gerenciamento de casos, registro e histórico dos processos de disputa e codifica as regras do procedimento.

A plataforma digital de resolução online do IJOP no Brasil é um projeto que se utiliza de *Inteligência Artificial*. O sistema, inicialmente voltado para demandas de direito do consumidor, busca trazer celeridade, segurança e eficiência na resolução de conflitos pré-processuais. Dessa forma, a tecnologia atua enquanto mediador ou conciliador digital, oferecendo, via meios, alternativas e possíveis soluções.

### A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS EM CONFLITOS INTERNACIONAIS

A **TECNOLOGIA** apresenta diversas vantagens no contexto conflitual: internacionalidade, acessibilidade internacional, interoperabilidade, descentralização, deslocalização, anonimidade e engrenagem, adaptabilidade, incorporabilidade ou imutabilidade. Enquanto **desvantagens**, percebe-se uma flexibilidade de regulação, desconexão na tecnologia por parte da sociedade e tendência a falta de acesso em países emergentes, e que trará o avanço da aplicação de tecnologia.

A **ODR** oferece vantagens para combater a utilização de tecnologias com as técnicas alternativas, visando maior facilidade, alcance, rapidez e economia, e conciliando enquanto via efetiva para abordar os abundantos disputas de âmbito online. As técnicas mais comuns de ODR são a negociação tecnologicamente assistida, a mediação online e a arbitragem online.

Entre suas vantagens, cita-se a adaptabilidade a diferentes contextos, eficiência, rapidez e economicidade, assim como a capacidade de contribuir para o desenvolvimento de economias emergentes. No que concerne a **desvantagens** no seu desenvolvimento, a ODR envolve uma falta com questões como o desconhecimento dos mecanismos, de suas vantagens e funcionamento da segurança das plataformas e o uso forçado online de seus serviços em geral, de falta de acesso universal a serviços de internet de qualidade gratuita ou a preços razoáveis, assim como a cultura jurídica que prevalece no país de elevada propensão ao litígio, e que dificulta recorrer a métodos alternativos para resolver conflitos.

O **USO DE TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS** traz à tona uma reação ampla da resolução de disputas online, não muito além de apenas facilitar a comunicação, mas considerando enquanto variáveis quanto parte no processo de resolução de conflitos. Nesse contexto, as tecnologias podem auxiliar no planejamento das melhores estratégias e na tomada de decisões corretas, atuando enquanto assistente; ou mesmo conciliador em si e própria mediador no âmbito, atuando enquanto representante da parte, exercendo um papel altamente ativo.

### A UTILIZAÇÃO DE BLOCKCHAIN EM ODR TRAZ DIVERSAS POSSIBILIDADES, COMO A REALIZAÇÃO DE CASOS DE DESEMPENHO DE CONTRATOS

A utilização de *Blockchain* em ODR traz diversas possibilidades, como a redução de custos de desenvolvimento de contratos, e consequentemente, o custo com a proteção de direitos, e fornecimento de um ambiente seguro para a geração de evidências baseadas em *Blockchain* evidências inteligentes, e interação eficiente e rápida para resolução diversificada de conflitos, aliada com a imutabilidade da decisão. É possível utilizar o *Blockchain* para oferecer soluções personalizadas para possíveis litígios, como contratos de compliance de transações, assim como ambiente de depósito judicial de transações e evidências eletrônicas para instituições financeiras, instituições de propriedade intelectual e plataformas de comércio eletrônico. Sua aplicação, portanto, constitui-se como um *Intelli-ge-jud* de conflitos. Serviços inteligentes podem proporcionar, desde uma revisão rápida de evidências de textos a um julgamento rápido por *cases arbitrários*, ou até mesmo a aplicação de *AI* como base em *smart contracts*.

A *Inteligência Artificial* traz a automatização de processos de *decision-making*, aperfeiçoando o sistema e facilitando em casos de demandas repetitivas. A partir dela, surge a ideia de *Judge as a Service (JaaS)*, na qual o máximo ataria como um facilitador sem poderes decisórios para reverter ou alterar transações realizadas através de *smart contracts* com base de *Blockchain*, propondo uma fonte mais harmônica de resolução de conflitos em ODR. Nesse contexto, o *JaaS*, dentro as condições estabelecidas através de sua programação, ponderaria dentro dos limites legais do *smart contract* acordado entre as partes, propondo facilitar a resolução de um impasse. Cita-se ainda o uso de mecanismos como *double blind bidding* e *visual blind bidding*, nos quais as exigências de cada parte são manifestadas sem o conhecimento da outra parte, deixando o cargo de algoritmo a análise dos projetos e a favorável de um acordo.

### O ESTADO DAS TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS, ESPECIFICAMENTE, SE REFLETE EM ESTENDER AS INOVAÇÕES E SUAS CONSEQUENTES REGULAS, CONSIDERANDO BASES PARA OS NOVOS PADRÕES CRIADOS, O DESENVOLVIMENTO DE REGULAS E SUA MODERNIZAÇÃO

Os métodos adequados de solução de conflitos disputam como viáveis e efetivos para a construção de acordos, cuja adoção e popularidade tem crescido nas últimas décadas, se apresentando como uma solução estratégica e eficiente para os litígios.

Esse o aspecto, busca-se estudar a aplicação de tecnologias disruptivas na solução de conflitos online, no contexto das Américas, com foco nos impactos e efetividade frente as soluções alternativas de resolução de disputas na perspectiva do acesso à justiça transnacional.

### AS PERGUNTAS DA PESQUISA SE VOLTAM PARA:

- Como a tecnologia disruptiva pode ser utilizada de modo a beneficiar a *Online Dispute Resolution*?
- Poderia a tecnologia disruptiva influenciar positivamente facilitando a realização de acordos e a satisfação do interesse?
- O que se tem realizado nas Américas sobre o tema? Quais os impactos? Quais as vantagens? Quais os riscos?

# Os investimentos estrangeiros na construção de uma economia sustentável: o caso do Comprehensive Agreement on Investments entre a China e a União Europeia

**Anna Karoliny FONSECA COMETT**

Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil)

Directora: Raizer Borges, Valesca

Palavras chaves: investimento estrangeiro, Direito internacional privado, arbitragem de investimentos, União Europeia, China.

## SÍNTESE DA APRESENTAÇÃO

À medida que a globalização e a construção de uma sociedade "pós-ocidental" avançam, confrontos regulatórios, culturais e políticos têm sido travados. E o suporte físico dessas disputas tem sido a economia internacional. Isto é, o multilateralismo vem perdendo espaço para os acordos preferenciais bilaterais de comércio. Manger (2009) explica que as potências econômicas estão tentando acesso aos mercados emergentes e importantes territórios produtivos por intermédio desses acordos.

Ademais, os novos atores do direito internacional, por exemplo a União Europeia (UE), têm usado de acordos remodelados de investimento ou de livre comércio para extrapolar os seus valores e influenciar outras grandes po-

tências a adotarem posições em direção ao desenvolvimento sustentável. Um dos reflexos da coligação desses fatores, é a remodelação e criação de conceitos secularmente construídos, a exemplo do investimento estrangeiro.

Como resultado dos esforços em prol do desenvolvimento sustentável, foi cunhado o termo "*green investment*", que pode ser definido como "investimentos em atividades que ajudam na prevenção, mitigação, reversão ou compensação de impactos negativos sobre o meio ambiente" (GERASIMCHUK, 2010). Por outro lado, os investimentos tradicionais, geralmente, "têm um prejuízo ambiental significativo e direto e são referidos como ambientalmente nocivos (por exemplo, na extração de combustíveis fósseis, mineração, celulose e papel, petroquímica e outros setores)" (GERASIMCHUK, 2010).

Dentre as expressões do investimento verde está o investimento estrangeiro em energias renováveis. Fábio Morosini e Vi-

vian Gabriel (2022) explicam que os investimentos *chineses greenfield* no Brasil — aqueles que começam do zero por meio do estabelecimento de uma subsidiária — estão concentrados em diferentes setores, por exemplo o de energias renováveis. De acordo com Vivianne Bath (2018), a abordagem chinesa quanto aos acordos internacionais de investimento tem quatro características principais. Em primeiro lugar, existe uma estreita correlação entre a regulamentação interna de investimentos, os objetivos de investimento no exterior (*outward investment*) e os compromissos da China em seus tratados de investimento.

Em segundo lugar, as políticas gerais da China sugerem que esta não está completamente, ou talvez até principalmente, dependente do sistema internacional de investimentos como um meio principal de regulamentação e aplicação. Terceiro, a China enfatiza seu papel como país em desenvolvimento e como líder e modelo para outros países em desenvolvimento.

Por último, a China está dando ênfase considerável aos tratados bilaterais de investimento (BIT) de "alto padrão" ou "alta qualidade" e aos acordos de livre comércio. Os tratados recentes da China demonstram considerável flexibilidade da China em relação tanto à proteção de investimentos quanto à resolução de disputas — como é o caso do *Comprehensive Agreement on Investment* (CAI).

O CAI foi firmado inicialmente em 2020,

entre a China e a UE. De acordo com a Comissão Europeia, o CAI funciona como uma tentativa de conceder aos investidores da UE um ambiente mais equilibrado na China — incluindo regras claras sobre empresas estatais, obrigações de transparência e regras que proíbem transferências forçadas de tecnologia. Além disso, o acordo contém disposições sobre desenvolvimento sustentável e compromisso com o Acordo de Paris sobre Mudança Climática e com convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho.

Tradicionalmente, o mercado chinês tem sido muito menos aberto ao investimento estrangeiro do que o da União Europeia — e certamente menos aberto à influência da política internacional em assuntos internos. Portanto, é visível que, para que cheguem a um acordo tão ambicioso, a UE e a China reconhecem a importância de suas relações comerciais para alavancar a economia e o mercado interno — mesmo quando isso significa que o governo chinês teria que mudar suas regras do jogo quanto às políticas voltadas à sustentabilidade.

De outro giro, Wouters e Hachez (2011) explicam que, não raramente, investidores tradicionais têm sido mantidos em um regime de benefício e proteção que pode impedir o avanço do desenvolvimento sustentável. Isto é, afirmam que, por um lado, investimentos podem ser vistos como ameaças a este desenvolvimento quando não apropriadamente regulados. Este é o espaço no qual a arbitragem de investimentos pode ter uma ação mais pontual. Em outras palavras, considerando que este

ramo da arbitragem está em constante desenvolvimento e que é um responsável direto pela reconstrução do Direito Internacional dos Investimentos, há uma grande influência no processo de *law-making* – de modo a balancear as referidas proteções e garantias em favor da sustentabilidade.

Como consequência – assim como ocorreu com a própria definição de investimento, fortemente influenciada pelo Caso Salini v. Marrocos, que criou o teste de Salini – as sentenças arbitrais internacionais têm o condão de balancear a situação de modo a guiar não só a redefinição de investimento estrangeiro direto, mas também, respeitada a autonomia das partes e do tribunal arbitral, eventualmente adentrar em questões que tangenciam o progresso de um desenvolvimento econômico sustentável.

## Referências Bibliográficas

BATH, Vivienne, "The South and Alternative Models of Trade and Investment Regulation: Chinese Investment and Approaches to International Investment Agreements", . In: MOROSINI, Fabio / BADIN, Michelle Raton Sanchez, *Reconceptualizing International Investment Law from the Global South*, Reino Unido:, Cambridge University Press, 2018.

GERASIMCHUK, Ivetta, "Rethinking Green Versus Conventional Investment Flows in BRIC + Countries", *Review of Emerging Trends and a Model For Future Research. Journal of Environmental Investing*, vol. I, nº 2, 2010.

MANGER, Mark S., *Investing in Protection: The Politics of Preferential Trade Agreements between North and South*, Reino Unido, Cambridge University Press, 2009.

MOROSINI, Fabio / GABRIEL, Vivian Daniele Rocha, "Chinese investments in Brazil: brief panoramic characterization", *Macau Journal of Brazilian Studies*, vol. 5, ed. 1, abril de 2022. Disponível em: [https://www.academia.edu/84029162/CHINESE\\_INVESTMENTS\\_IN\\_BRAZIL\\_BRIEF\\_PANORAMIC\\_CHARACTERIZATION](https://www.academia.edu/84029162/CHINESE_INVESTMENTS_IN_BRAZIL_BRIEF_PANORAMIC_CHARACTERIZATION). Acesso em: 16 Set. 2022.

WOUTERS, Jan / HACHEZ, Nicolas, "Chapter 25: The Institutionalization of Investment Arbitration and Sustainable Development", in: SEGGER, Marie-Claire Cordonier / GEHRING, Markus W. et al., , "Sustainable Development in World Investment Law", *Global Trade Law Series*, vol. 30, 2011.

JÓVENES INVESTIGADORES/AS  
POSTER

2022



Anna Karoliny Fonseca Cometti, Brasil, Universidade Federal do Espírito Santo

Os investimentos estrangeiros na construção de uma economia sustentável: o caso do *Comprehensive Agreement on Investment* entre a China e a União Europeia



Categoria A

**Perfil da autora**

Graduanda em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Estagiária na CAMARB - Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial. Assistente de pesquisa em Direito Internacional Privado e Arbitragem Comercial Internacional. Monitora de Direito Internacional Privado. Coordenadora do Observatório de Decisões Arbitrais Internacionais do LABCODEX. Editora no CAM-CCBC NewGen News.

**Coordenadora**

**Subcoordenador/as:** Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. Valéria Raizer Borges Moscher  
**Projeto de investigação institucional:** Caso/descópio do Processo Civil Internacional

**Marco teórico:** adota-se como marco teórico a linha de pesquisa do prof. José Moreno, que investiga os efeitos do direito internacional privado nos investimentos estrangeiros, sobretudo sob o enfoque da arbitragem. Ademais, a pesquisa utilizou os ensinamentos do prof. Fábio Morosini e da prof. Michelle Badin quanto à perspectiva do "sul global", mormente no que tange a China, para analisar o direito internacional dos investimentos.

**Hipóteses do trabalho:**

1. É possível que os investimentos estrangeiros sejam protagonistas na construção de uma economia internacional sustentável?
2. A arbitragem de investimentos é uma ferramenta útil a este propósito?
3. Acordos preferenciais entre a União Europeia e a China corroboram este cenário?

• Imagem do Google.

**Objetivos:** analisar a utilização da arbitragem como mecanismo de remodelação do direito internacional dos investimentos, sobretudo no viés do direito internacional privado, na direção da construção de uma economia sustentável. O trabalho utiliza como objeto de pesquisa o *Comprehensive Agreement on Investment (CAI)* firmado entre a União Europeia e a China, em 2020. A escolha se justifica pela mudança de política interna e externa chinesas, bem como sua inserção na economia internacional, e nos objetivos da UE de promover os seus valores por intermédio de acordos preferenciais.

**Principais aspectos do acordo CAI (2020):**

(i) é uma tentativa de conceder aos investidores da UE um ambiente mais estável na China; (ii) contém disposições sobre desenvolvimento sustentável e compromisso com o Acordo de Paris e com convenções da OIT; (iii) Transparência nas relações; e (IV) As disposições relevantes estão sujeitas a um mecanismo de implementação especificamente adaptado para tratar as diferenças com um alto grau de transparência e participação da sociedade civil.

**O papel da arbitragem de investimentos:** Os investimentos tradicionais geralmente implicam um prejuízo ambiental direto e significativo. Ainda assim, por serem positivos para o desenvolvimento, os investidores têm sido mantidos sob um regime de proteção e benefício - quando não propriamente regulados. Assim, a arbitragem, um importante ator na reconstrução do sistema de investimentos estrangeiros, tem uma grande influência no processo de *law-making*, por intermédio das sentenças proferidas, de modo a balancear as proteções do investidor em favor do objetivo de sustentabilidade.

**Metodologia da pesquisa**

O trabalho se aproveita do método hipotético-dedutivo, por intermédio de levantamento bibliográfico, análise de documentos jurídicos chineses e do tratado internacional em comento.

**Bibliografia**

- GERASIMCHUK, Ivetta. Rethinking Green Versus Conventional Investment Flows in BRIC+ Countries: Review of Emerging Trends and a Model For Future Research. *Journal of Environmental Investing*, v. 1, nº 2, 39-55, 2010.
- MOROSINI, Fábio; BADIN, Michelle R. S. *Reconceptualizing International Investment Law from the Global South*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2018.
- RODRÍGUEZ, José Antonio Moreno. *The Hague Academy of International Law. Summer Courses on Private International Law. Privately International Law and Investment Arbitration*. 2021.

**Resultados/Reflexões**

O trabalho, que não se propõe a antever resultados tendo em vista tratar de um projeto a longo prazo, buscou traçar uma reflexão sobre a utilização de métodos de resolução de disputes, a exemplo da arbitragem de investimentos, com o objetivo de remodelar estruturas já existentes e complexas. A China, tradicionalmente fechada à influência externa, firmou acordo de investimentos com um dos maiores atores da economia mundial, a União Europeia - que, por meio da sua política externa, promove os seus valores com o auxílio, entre outros, de acordos preferenciais de comércio e investimentos. E este, contudo, não se trata de um acordo que impactará somente as partes envolvidas. Do contrário, envolvendo dois dos maiores investidores estrangeiros do mundo, questiona-se quais seriam os seus efeitos no desenvolvimento de uma economia sustentável transnacional.

# Medidas de harmonização dos meios de responsabilização das exchanges estrangeiras por danos causados a clientes investidores

**Isabela LOSS LOPES**

Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil)

Directora: Raizer Borges, Valesca

Palavras chaves: globalização, financeirização, tecnologia, capitalismo, criptoativos.

## RESUMO

A globalização está na ordem do dia.” (BAUMAN, 1999, p. 7). A frase cunhada pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman em seu livro “Globalização: as consequências humanas” publicado em 1999 pode, sem qualquer prejuízo, ser empregada para descrever a roupagem da internacionalização da atividade humana desempenhada na segunda década do século XXI. Isso ocorre, pois, como fenômeno potencializado pelo desenvolvimento das tecnologias da informação, a globalização foi, e ainda é, responsável por transformar aspectos culturais, sociais e políticos das sociedades modernas.

Nesse contexto, os avanços no campo da tecnologia da informação, concebidos a partir da Revolução Técnico-Científica-Informacional, foram responsáveis por criar um novo processo de

globalização. Esse, caracterizado pela “compressão” do tempo/espço implica a quase total “supressão da gravidade” (BAUMAN, 1999, p. 52), ao possibilitar que as mais variadas espécies de dados e informações se movimentem na velocidade do sinal eletrônico, sendo esse “praticamente livre de restrições relacionadas ao território de onde partiu, ao qual se dirige ou que travessa” (BAUMAN, 1999, p. 53).

Aliado a isso, ao modificar a estrutura das relações na sociedade, alterou-se também a forma como o capital – em seu sentido mais amplo – se posiciona no mundo. Nesse sentido, sob o domínio de uma lógica de mercado instaurada pela reestruturação produtiva pós-crise dos anos de 1970, emergiu a estrutura político-econômica neoliberal, a qual se vale das avançadas tecnologias de comunicação e transporte para garantir a sua difusão. Contudo, apesar das benesses trazidas pela maior interação comercial entre as diferentes nações e por parte dos indivíduos que nelas habitam, o capital não possui mais domi-

cílio fixo, move-se rapidamente, concentrando em si grande capacidade de circulação de riquezas, estando permanentemente um passo a frente da aptidão regulamentadora dos Estados (BAUMAN, 1999, p. 52).

Mediante ao exposto, é possível identificar que a “revolução” do capitalismo da economia liberal de mercado do século XXI, concentra-se na pulverização da internet e disseminação dos computadores pessoais e smartphones. Esses movimentos possibilitaram a integração, liberalização e financeirização dos mercados a nível global, como resultante da relação simbiótica entre o capitalismo financeiro e a revolução informacional. Com isso, na contramão da oligopolização da internet e influenciado pelos impactos da crise financeira de 2008, surgiu, em 2009, a primeira e mais relevante criptomoeda, o Bitcoin (PARANÁ, 2020, p. 85).

Estruturado a partir da implementação da tecnologia do *Blockchain*, o *Bitcoin* é definido como uma moeda descentralizada, operada por meio de uma rede peer-to-peer de computadores sustentada por um *software* de código aberto que suporta o movimento de moedas e pode ser monitorado por todos os usuários em todo o mundo (PARANÁ, 2020, p. 91). A emissão da dita moeda se dá pela relação trabalho/dispêndio de poder computacional, digitalizando, assim, o gasto energético. Vale ressaltar que é possível observar na concepção ideológica das bases fundantes dessa tecnologia traços convergentes às pautas defendidas pelo movimento da contracultura da costa oeste estadunidense,

como a circulação anarquicamente livre da informação, dos softwares livres e da programação em aberto (PARANÁ, 2020, p. 85). No entanto, apesar de em sua concepção as criptomedas terem como objetivo representar um meio de desestatização da moeda nacional, com o decorrer do tempo essas sofreram voluptuosas inserções financeiras e, conseqüentemente, foram absorvidas pela lógica de mercado. Percebeu-se, assim, que a função desempenhada por esses criptoativos se relaciona mais ao caráter especulativo do capital do que à capacidade de atingir o objetivo almejado.

Dado o caráter especulativo desse ativo, desenvolveu-se ao redor dele um mercado de elevada complexidade, com diferentes níveis e tipos de riscos e composto por uma rede pluriconectada de atores. Para que se tenha acesso a esse mercado, os indivíduos interessados se utilizam de uma espécie de “banco” virtual informal – as *exchanges* – criado especificamente para a negociação desses ativos (PARANÁ, 2020, p. 121).

Estruturadas a partir de uma lógica centralizada ou também descentralizada de gerenciamento, essas plataformas intermediárias são responsáveis por conectar o negociador do ativo às ofertas, por meio da operacionalização da troca de ativos criptografados ou pela compra desses ativos através de moeda corrente nacional (GRUPENMACHER, 2019, p. 59). Cabe pontuar que, diferentemente do mercado mobiliário tradicional, tendo cada país o seu, com claras regras de atuação e normativas que regulam a negociação internacional, as plataformas intermediárias de criptoativos foram constituídas sob a mesma lógica pulverizada da internet, levando

à seara financeira a relativização das fronteiras territoriais.

Ao analisar a atividade desempenhada por essas plataformas, observa-se que que além da negociação, essas são também responsáveis pela custódia dos ativos de terceiros, o que, caso não gerido com responsabilidade, pode gerar danos e prejuízos, tanto para titularidade da gerência, quanto para os clientes. Com isso, é inevitável, dada suas similaridades, traçar comparativos com o mercado de capitais tradicional. Desse modo, dúvidas são levantadas acerca dos meios de proteção ao investidor e a natureza dos vínculos firmados nesses ambientes, pois se tratando de um interesse público – qual seja a proteção de investidores – é necessário que haja a devida tutela jurisdicional. Isso ocorre principalmente ao analisar o vínculo firmado entre a exchange e o investidor a partir da ótica consumerista, já que devido à estrutura do negócio ser pautada na oferta de serviços de compra e venda e na cotação de criptoativos, o qual é realizado tendo como contrapartida o pagamento de taxas para a realização dessas atividades, firma-se evidente relações contratuais de caráter essencialmente consumerista.

Sob essa perspectiva, torna-se de fundamental necessidade a compreensão jurídica dos elementos de estraneidade intrínsecos desses vínculos obrigacionais, com a abrangência de hipóteses de violação de direito, de modo a estabelecer de forma clara e eficiente as estruturas de solução de controvérsias, bem como possíveis conflitos acerca da jurisdição e da mel-

hor lei aplicável para a devida responsabilização dessas empresas e para a proteção do investidor. É importante, desse modo, salientar que para haver tutela jurisdicional sobre determinado bem, este precisa necessariamente possuir definição jurídica. Assim, a tentativa de proteção das relações firmadas dentro do âmbito das *exchanges*, bem como o patrimônio dos indivíduos, esbarra no fato do arcabouço regulatório desse mercado ser ainda muito incipiente, o qual carece de normas de regulamentação tanto em âmbito nacional como internacional capazes de pautar o devido exercício desses ativos, bem como dos prestadores de serviços.

Na tentativa de dar aos criptoativos contornos de bem jurídico, no contexto nacional, em 11 de outubro de 2022, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou o Parecer de Orientação nº 40 da CVM a fim de trazer orientações, claramente por meio de visão inicial e sem caráter exaustivo, acerca do objetivo de "garantir maior previsibilidade e segurança, bem como de fomentar ambiente favorável ao desenvolvimento dos criptoativos, com integridade e com aderência a princípios constitucionais e legais relevantes", além da proteção do investidor e da poupança popular. Nesse documento a autarquia esclarece que a tokenização em si não está sujeita à prévia aprovação ou registro perante o órgão. Contudo, caso a análise do caso concreto confirme o enquadramento do criptoativo como valor mobiliário, a esse será aplicado a regulamentação específica caso tenha sido objeto de oferta pública, pois o parecer deixa claro que a regulamentação aplicável da CVM

deverá ser observada em sua totalidade sendo necessário o registro da oferta e do emissor, a prestação de informações periódicas, a participação de intermediários autorizados e a negociação dos ativos em mercados regulamentados (PARECER ORIENTAÇÃO n° 40,CVM, 2022).

Assim, Tendo em vista o que foi levantado até aqui, esse tema se torna caro ao Direito Internacional Privado dado a inserção dessas empresas e a negociação dos ativos em mercados de diversos países, obtendo acesso às respectivas poupanças populares, de modo a impactarem de forma significativa as relações jurídicas e econômicas lá firmadas. Diante disso, debates sobre a regulação desses ativos estão cada vez mais em voga no âmbito global, com o reconhecimento de que este é um desafio transfronteiriço e que demanda orientações, por meio do órgão regulador competente, de modo a elaborar os melhores contornos para a definição das características e implicações da negociação desses ativos.

## BIBLIOGRAFIA

BAUMAN, Zygmunt, *Globalização: as conseqüências humanas*, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1999.

CVM divulga Parecer de Orientação sobre criptoativos e o mercado de valores mobiliários. Ministério da Economia. Disponível em:  
<[https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/orgaos-colegiados/conselho-de-recursos-do-sistema-financeiro-](https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/orgaos-colegiados/conselho-de-recursos-do-sistema-financeiro-nacional/acesso-a-informacao/noticias/2022/cvm-divulga-parecer-de-orientacao-sobre-criptoativos-e-o-mercado-de-valores-mobiliarios)

[nacional/acesso-a-informacao/noticias/2022/cvm-divulga-parecer-de-orientacao-sobre-criptoativos-e-o-mercado-de-valores-mobiliarios](https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/orgaos-colegiados/conselho-de-recursos-do-sistema-financeiro-nacional/acesso-a-informacao/noticias/2022/cvm-divulga-parecer-de-orientacao-sobre-criptoativos-e-o-mercado-de-valores-mobiliarios)>. Acesso em: 25 out. 2022.

GRUPENMACHER, Giovana Treiger., "As Plataformas de Negociação de Criptoativos: Uma análise comparativa com as atividades das corretoras e da Bolsa sob a perspectiva da proteção do investidor e da prevenção à lavagem dinheiro", São Paulo, Dissertação de Mestrado apresentada à Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV - Direito SP), 2019.

PARANÁ, Edimilson., *Bitcoin: a utopia tecnocrática do dinheiro apolítico*, São Paulo, Autonomia Literária, 2020.

RAMOS, André de C., *Curso de Direito Internacional Privado*., Editora Saraiva, 2021. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555595352/>. Acesso em: 26 set. 2022.

JÓVENES INVESTIGADORES/AS  
POSTER  
2022



Isabela Loss Lopes, Brasil, País, Unversidade Federal do Espírito Santo  
Medidas de harmonização dos meios de responsabilização das exchanges por danos causados a investidores.



Cenário Brasileiro

Perfil da Autora

Estudante do quinto período do curso de Direito na Universidade Federal do Espírito Santo – UFES/BRASIL. Pesquisadora acadêmica do Labirinto de Codificação do Direito Processual Internacional (LABCODEX). Monitorada disciplina de Direito Internacional Privado na Ufes.

Coordenadora

Subcoordenador/a: **Prof. Dra. Valesca Raizer Borges Moschen**.  
Projeto de investigação institucional: **Caleidoscópio do Processo Civil Internacional**

Marco Teórico

Adota-se como marco teórico da investigação o entendimento do fenômeno da globalização traído pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman e a consequente readaptação da atuação do capital na sociedade do século XXI, como resultado da financeirização digital do mercado global. Sob essa ótica, analisa-se o surgimento das criptomoedas, bem como do ambiente de negociação pulverizado, as chamadas exchanges, inerente à essa modalidade de ativo.

Hipótese do Trabalho

- Analisar as tendências do século XXI que resultaram no surgimento e ampla disseminação de uma criptomoeda, bem como a complexidade das relações econômicas surgidas a partir de sua negociação.
- Buscar analisar como a natureza internacional desse ativo, juntamente com o seu caráter digital e inovador, dificultam a regulamentação por parte dos Estados e consequentemente, dificultam a cobertura da tutela jurídica sobre eventuais danos aos investidores.

● Imagem do Google.

Os avanços no campo da tecnologia da informação, concebidos a partir da Revolução Técnico-Científica-Informacional, foram responsáveis por criar um novo processo de globalização a partir da pulverização da internet e da disseminação dos computadores pessoais e smartphones. Com isso, caracterizado pela “compressão” do tempo/espço, a partir desse fenômeno global, foi possível a integração, liberalização e francetização dos mercados, como resultado da relação simbiótica entre o capitalismo financeiro e a revolução informacional. Nesse contexto, surgiu em 2009, a primeira e mais relevante criptomoeda, o Bitcoin. Para que esse ativo seja negociado, desenvolveu-se, sob influência da mesma lógica de rede da internet e dos próprios criptativos, uma espécie de Internet virtual informal, as popularmente conhecidas como exchanges.



Em detrimento do caráter especulativo desse ativo, desenvolveu-se ao redor dele um mercado de elevada complexidade, com diversos níveis e tipos de riscos e composto por uma rede pluriconexada de ativos. Ao analisar a atividade desempenhada por essas plataformas, observa-se que que além da negociação, essas são também responsáveis pela custódia dos ativos de terceiros, o que, caso não gerido com responsabilidade, pode gerar danos e prejuízos, tanto para titularidade da gerência, quanto para os clientes. Contudo, o arcabouço regulatório desse mercado ser ainda muito incipiente, o qual carece de normas de regulamentação tanto em âmbito nacional como internacional capazes de punir o devido exercício desses ativos, bem como dos prestadores de serviços. Assim, mesmo existindo desde 2009, é possível comentar, mediante as atividades das órgãos reguladoras de cada país, que somente nos últimos anos que o assunto vem sendo tratado com a devida importância, resultando na atualização de forças na tentativa de fazer com que a capacidade regulatória dos Estados acompanhe as novas tecnologias.

Metodologia da Pesquisa

A metodologia empregada, a fim de analisar o fenômeno posto e seus impactos, baseia-se na análise teórica da bibliografia existente sobre o tema, bem como documentos publicados pela CVM, autarquia responsável por regular o mercado de capitais brasileiro e os ativos nele negociados.

Bibliografia

- BARROSO, Tiago. *Globalização e responsabilidade*. São Paulo: Proq, 2008.
- CVM. *Avança Futuro de Educação com tecnologia e o mercado de valores mobiliários*. Brasília: Ministério da Economia, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/educacao/relatorio-educacao-de-mercado-de-valores-mobiliarios-2021/relatorio-educacao-de-mercado-de-valores-mobiliarios-2021.pdf>. Acesso em: 02 de maio 2022.
- COELHO, Tiago. *Bitcoin: um novo tipo de plataforma de negociação de criptomoedas*. Uma análise comparativa com as atividades das corretoras e do Bole sob a perspectiva do princípio de liberdade de comércio e da proteção à longevidade. São Paulo: Universidade de Marília (Unimar), 2021. Disponível em: <https://repositorio.unimar.br/bitstream/handle/123456789/123456789/1/2021-05-20-tese-123456789.pdf>. Acesso em: 02 de maio 2022.
- FRANCO, Mariana. *Bitcoin: um novo tipo de plataforma de negociação de criptomoedas*. São Paulo: Universidade de Marília, 2021.
- FRANCO, André de C. *COMO O DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO*. São Paulo: Lumen Juris, 2011. 1ª edição. ISBN 9788532012345. Disponível em: <https://www.lumenjuris.br/livro/9788532012345/>. Acesso em: 02 de maio 2022.

Resultados/Reflexões

- Os criptativos estão sendo amplamente adotados por indivíduos em toda parte do mundo. Fato esse demonstra a necessidade dos Estados Nacionais de absorverem as mudanças inerentes a sociedade tecnológica do século XXI e de recepcionarem a norma jurídica a partir da atividade já existente, de modo a estabelecer os limites necessários para o desenvolvimento ideal da atividade econômica.
- A importância dessa regulamentação não está sendo negligenciada pelo poder público dos mais diversos países, mas esses andam a passos lentos frente aos riscos e danos aos quais os investidores e a própria população estão expostos.
- Nessa linha, dado a face global dessa questão, é fundamental que as normativas reguladoras dos Estados procurem pontos de harmonia capazes de possibilitar a cooperação jurídica e a devida tutela jurisdicional.

# (In)efectividade da aplicação da Convenção da Haia de 1980 no Judiciário brasileiro

**Gabriel TELES PONTES**

Universidade de Brasilia (Brasil)

Directora: Lopes, Inez

Palavras chaves: direitos da criança, subtração internacional, Convenção da Haia de 1980, efetividade na jurisprudência, Superior Tribunal de Justiça

## SÍNTESE DA APRESENTAÇÃO

A pesquisa estuda as questões referentes à subtração internacional e tem a seguinte problemática: o cumprimento da Convenção da Haia de 1980 sobre Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças (CH-1980) tem sido efetivo nos tribunais brasileiros da primeira à última instância, de modo a garantir o acesso à justiça? Como objetivo geral, esta pesquisa propõe verificar a efetividade da aplicação das normas da CH-1980 no âmbito do Judiciário brasileiro. Quanto aos objetivos específicos, acompanhará a evolução do Direito Internacional Privado, no Brasil, quanto à subtração internacional de crianças; investigará os obstáculos jurídicos que intensificam essa problemática; e, por fim, contribuirá para o debate acadêmico a respeito dos desafios da justiça transnacional, em especial, a

brasileira, no tocante ao sequestro internacional de crianças.

A metodologia utilizada é a pesquisa exploratória e revisão bibliográfica, a partir de fontes primárias e secundárias, e estudo de casos, a partir dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em resposta a recursos interpostos a decisões dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) brasileiros, com o recorte espaço-temporal de 2017 a 2022, totalizando oito decisões nos últimos cinco anos com conteúdo relevante para a presente pesquisa. Os modos de aplicação das disposições da Convenção foram divididos em dois: a via de regra e a via excepcional.. Constituem, respectivamente, por um lado, a possibilidade de a autoridade judicial decidir pela devolução imediata da criança subtraída ao país de domicílio habitual anterior, e por outro lado a decisão da não devolução, baseada em hipóteses excepcionais previstas pela Convenção, conforme Arts. 4º, 12 e 13.

O STJ, formador de tendências jurisprudenciais para todos os Tribunais Regiona-

ais Federais brasileiros – e sendo a argumentação de suas decisões verdadeiras balizas a partir das quais são elaboradas as estratégias de defesa das partes processuais por meio de seus advogados –, possui papel fundamental no compromisso brasileiro para com o acordo internacional, do qual é o Brasil Estado Contratante. A maior parte dos casos estudados versa sobre as hipóteses excepcionais dispostas pela Convenção da Haia, isto é, para determinar que não haja uma nova transferência da criança, que ou já foi restituída (vide REsp 1880584) ou nunca o foi (vide AgInt 14174/SP, REsp 1387905 e REsp 1788601), ou determinando oitiva e perícia psicológica (REsp 1458218 e REsp 1727052).

O que chama a atenção – e é até mesmo reconhecido pelo Tribunal Superior (vide REsp 1723068/RS e REsp 1458218/RJ) – é que alguns julgados são orientados em manifesta contradição com a literalidade da Convenção da Haia de 1980, buscando respaldo em uma interpretação teleológica, com realce para uma análise principiológica e hierárquica da Constituição Federal (conforme REsp 1458218/RJ, que cita o julgado do STF no RE 349.703), bem como destaque semelhante para o preâmbulo da própria Convenção (vide REsp 1788601/SP), de forma a suscitar a teleologia do acordo internacional. A retórica argumentativa do STJ é de denominar essas circunstâncias como “situações excepcionálissimas”. Dos pontos 21 em diante da ementa do REsp 1723068/RS, a argumentação conduz à compreensão de que o entendimento do STJ é de que, em situações excepcionálissimas nas quais for verificado

que o melhor interesse da criança é contrário à literalidade da Convenção, a jurisprudência agirá em sua desconformidade.

O primeiro destaque é a necessidade de fundamentação jurídica rigorosa quando da não observância da literalidade da Convenção, visto que o não cumprimento literal das suas disposições pode ser visto pela comunidade jurídica internacional como descumprimento da Convenção e inefetividade pragmática de sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. Isso é indubitavelmente perigoso e compromete a própria segurança jurídica por falta de coerência entre os precedentes gerados, comumente chamada de “pacificação” da jurisprudência.

Já quanto às situações concretas exemplificadas no julgamento do REsp 1723068/RS, cabe ressaltar que, no caso de separação de irmãos, trata-se de condição de alta relevância, que realmente não deve ser ignorada, porém igualmente não se pode olvidar que utilizar esse requisito é inovar, no sentido de adicionar uma hipótese excepcional aos Arts. 12 e 13 da Convenção, haja vista que as exceções previstas pelo acordo nada dispõem sobre separação de irmãos. Assim, por que não ressaltar no julgado o profundo sofrimento psíquico que poderia ser gerado em virtude da ruptura do núcleo familiar, visto que é hipótese excepcional prevista pela Convenção?

Outro exemplo elencado pelo supracitado REsp é a ocorrência de longo período de judicialização da lide após a subtração, de forma que, quando o caso é finalmente decidido, as circunstâncias

de fato ensejamos análise da integração ao meio e de maturidade da criança, cuja manifestação sobre ser restituída ou permanecer onde está pode ser definidora para a decisão. É necessário observar que, para esses casos, a Convenção possui exceções, com uma ressalva. Embora permita que o menor não seja restituído por já estar integrado ao novo meio (art. 12, 2º segundo parágrafo) ou porque, com idade e maturidade suficientes, manifestou-se contrariamente à restituição (art. 13, penúltimo parágrafo), há um claro limite de observância entre o tempo da data da transferência ou da retenção indevida e a data do início do processo perante a autoridade judicial ou administrativa do Estado Contratante (art. 12, primeiro parágrafo). Assim, se o período for inferior a um ano, a Convenção dispõe a regra de restituição imediata da criança subtraída. As únicas exceções que podem ser levantadas nesse período inicial são as cinco elencadas acima, quando foram elencadas as hipóteses excepcionais previstas pela Convenção. Por isso (conforme reconhecido no REsp 1723068/RS e expressamente contrariado no AgInt 14174/SP), no período inferior a um ano, de acordo com a referência da Convenção, sequer deve ser analisada a integração ao novo meio propriamente dita.

A última categoria é a da constatação de existência de pluralidade de domicílios e de consentimento tácito de um dos genitores. Ora, se observado que a criança não possui um domicílio habitual fixo, a exceção se justifica pela impossibilidade de aplicação literal das disposições da Convenção, haja vista

que dependem da transferência ou da que dependem retenção de um domicílio habitual anterior, lícito, para um novo, após a subtração ilícita. Não é uma questão de, por inovação, adicionar uma hipótese excepcional, mas uma decorrência de situação fática que impossibilita a pura aplicação da Convenção. Já no caso do consentimento implícito (cuja elipse por si só já é problemática) do genitor que teve suas filhas subtraídas, tratado no REsp 1387905/RS, seria possível aproximar-se da exceção da intensa integração ao meio, ou mesmo da verificação de uma pluralidade de domicílios, haja vista que as crianças passavam longos períodos no Brasil e na Espanha, alternadamente, demonstrando habitação comum em ambos os países.

Nesse sentido, conclui-se que há uma relativa inefetividade no cumprimento das disposições da Convenção da Haia de 1980 no Judiciário brasileiro, visto que em alguns julgados observa-se contradição expressa a suas disposições, sobretudo no julgamento do AgInt na Pet 14174/SP de 2021, que embora cite o Art. 12 para embasar sua decisão vai em sentido contrário o que dispõe o referido artigo da Convenção, além de utilizar argumentos de interpretação teleológica em vez de fundamentar a decisão nas hipóteses excepcionais previstas, o que é dever de Estado Contratante do acordo internacional.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ÁGUILA, Nereida de L. Del / NARDI, Marcelo,, De. Retorno Imediato da Criança na Convenção da Haia de 1980:

exceção do artigo 13.1,b", in: FARIAS, Inéz L.M.C. de / MOSCHEN, Valesca R.B., *Desafios do direito internacional privado na sociedade contemporânea*, Lumen Juris, Rio de Janeiro.,2020.

ARAÚJO, Danielle F. M. de., *Infancias Plurais: um estudo sobre as interconexões globais e locais no campo de estudos do trabalho infanto-juvenil em Porto Seguro – BA*. Disponível em: <file:///C:/Users/Samsung/Downloads/Tese\_Danielle\_Araujo\_VERSA7710/FINAL/com/ficha/catalografica%20(1).pdf>. Tese (Doutorado) no Programa de Pós-Graduação em Estado e Sociedade da Universidade Federal do Sul da Bahia, 2021. Acesso em 23 set. 2022. Orientadora: Valéria Giannella.

CESTARI, Marisa A. / MELLO, Ricardo M. de, "Trabalho Infantil: um comparativo entre a Revolução Industrial e os dias atuais", in: Os desafios da Escola Pública Paranaense na Perspectiva do Professor Pde", *Cadernos PDE*, vol.I, Secretaria de Educação, Governo do Estado do Paraná. Versão Online. Disponível em: <[http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes\\_pd](http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pd)

JÓVENES INVESTIGADORES/AS  
POSTER

2022



PONTES, Gabriel - Brasil - Universidade de Brasília

(IN)EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DA HAIA DE  
1980 NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO

d) Direito Internacional Privado de proteção das famílias e dos direitos das crianças

**Perfil do autor:**

Finalista (último período) em  
Direito pela Universidade de  
Brasília (UnB).  
Pesquisador iniciante em Direito  
Internacional Privado.

**Orientadora:**

ProP. Dr<sup>a</sup>. Inez Lopes Matos Carneiro  
de Farias

**Marco teórico:**

A criança como sujeito de direitos  
(CESTARI & MELLO, 2016; ARAÚJO,  
2021); subtração internacional  
ilícita de crianças e necessidade  
geral de retorno imediato (ÁGUILA  
& NARDI, 2020; DORIA, 2015);  
paradoxo da criança adaptada  
(MEIRA, 2018).

**Problemática de pesquisa:**

O cumprimento da Convenção da Haia  
de 1980 tem sido efetivo nos tribunais  
brasileiros da primeira à última  
instância?

**Objetivos:**

**Geral:** Verificar a efetividade da aplicação das  
normas da CH-80 no âmbito do Judiciário  
brasileiro.

**Específicos:** Acompanhar a evolução do DIPr no  
Brasil / Investigar os obstáculos jurídicos /  
Contribuir para o debate acadêmico.

**Situações excepcionalíssimas:**

Devem encontrar respaldo nas hipóteses  
excepcionais da Convenção da Haia de 1980.  
A contradição expressa demonstra relativa  
inefetividade no cumprimento das disposições da  
Convenção no Judiciário brasileiro.

**Metodologia de pesquisa:**

- Pesquisa exploratória;
- Revisão bibliográfica;
- Estudo de casos judiciais (STJ),  
2017-2022).

**Bibliografia:**

ÁGUILA & NARDI, 2020;  
ARAÚJO, 2021;  
CESTARI & MELLO, 2016;  
DORIA, 2015;  
MEIRA, 2018

**Resultados e reflexões:**

Relativa inefetividade a partir da inconsistência  
jurisprudencial;  
Argumentação das situações excepcionalíssimas  
como enfraquecimento da força normativa da  
CH-80;  
Possibilidade de encaixe das referidas situações  
nas hipóteses excepcionais previstas pela CH-80;  
Necessidade de harmonização jurisprudencial e  
fortalecimento do compromisso perante a  
comunidade internacional.

# Pensar más allá de la territorialidad: la influencia de la tecnología *Blockchain* en el Derecho de la Propiedad Intelectual

**Rosario María REYNA**

Centro de Investigaciones- Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
Universidad Nacional del Litoral (Argentina )

Directora: All, Paula María

Palabras claves: Tecnología, *Blockchain*, Propiedad Intelectual, Territorialidad

## INTRODUCCIÓN

Nos encontramos frente a una problemática que reviste una complejidad sin precedentes en el plano jurídico, y plantea un cambio de paradigma en innumerables aspectos a partir del surgimiento de una tecnología disruptiva. La *Blockchain* es una base de datos pública que permite revisar las transacciones históricas de activos realizadas en su software, cómo se originaron y cómo se fueron transmitiendo. Técnicamente, es definida como “un registro digital de información que se almacena de forma distribuida en una red de nodos con la garantía de archivos idénticos en cada una de ellas”<sup>1</sup>. Su nota distintiva es la descentralización, lo cual brinda impor-

tantes beneficios en términos de transparencia y seguridad, ya que el mundo entero tiene acceso a sus registros.

El objeto de nuestra investigación es analizar la interacción entre esta nueva herramienta, caracterizada por la utilización de sistemas físico-cibernéticos, con un aspecto “tradicional” del Derecho de la Propiedad Intelectual (DPI). Mi investigación se lleva a cabo en el marco del CAI+D “Derecho Internacional Privado y Tecnología: ¿Un nuevo paradigma de reconstrucción material y procesal?” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

## OBJETIVO GENERAL

Explicar el impacto de la tecnología *Blockchain* en la gestión de los DPI, analizando las diversas aplicaciones -y

oportunidades- de esta innovación en términos de identificación y registración. Desde allí, abordar la contraposición entre la característica de descentralización de la *Blockchain* y el principio de territorialidad aplicado en términos de DPI.

## METODOLOGÍA

La metodología utilizada ha sido la deductiva, a través del cual se realizó un análisis cualitativo de la documental y normativa -instrumentos de *hard law* de fuente nacional e internacional, y de *soft law* producidos por organismos internacionales y grupos de trabajos expertos- que nos permitió encontrar argumentos acerca de la influencia de la *Blockchain* en materia de PI y su impacto en el principio de territorialidad imperante en esta área del Derecho. Para ello se utilizó el marco conceptual elaborado a través del análisis de la bibliografía específica que explicita los supuestos conceptuales y la construcción de protocolos de análisis de las diferentes unidades informantes identificadas. La técnica operativa de recolección de esos datos fue la documental.

## REFLEXIONES

Hasta el momento, la cuestión de “la influencia de la tecnología *Blockchain* en el DPI” no se encuentra ampliamente tratada por parte de la doctrina argentina, sino que su desarrollo se ha comenzado a dar en el ámbito de la doctrina extranjera y de

grupos de estudios de organismos internacionales. En este sentido, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un espacio primordial para el anclaje de opinión jurídica en cuanto a la relación *Blockchain*-Propiedad Intelectual, y donde es factible localizar la mayor cantidad de contenido teórico al respecto.

En nuestra opinión, la *Blockchain* supone una oportunidad única para la gestión de DPI. Así lo ha enunciado CLARK, destacando algunas de sus aplicaciones en el ámbito de la PI: “prueba de paternidad y autenticación de origen, registro y gestión de los derechos de PI; control y seguimiento de la distribución de los DPI, registrados o no; prueba de uso efectivo o primer uso comercial; gestión electrónica de los derechos. (...). También se puede utilizar con fines de autenticación y determinación del origen en los procesos de detección o recuperación de mercancías falsificadas, robadas y de importación paralela”<sup>2</sup>.

En esta línea, entendemos que la utilización de la *Blockchain* en este área permitiría un abordaje centralizado y extraterritorial de los DPI, habilitando la posibilidad de creación de un registro inmutable de las diferentes vicisitudes de un derecho durante su existencia. Según CLARK, “en ese registro podría figurar el momento en que se solicitó el registro de una marca por primera vez, el momento en que se inscribió en el registro de marcas y la primera vez que se utilizó comercialmente; cuándo se concedió una licencia; (...) cuándo se cedieron los

los derechos, etcétera. También resolvería los aspectos prácticos relativos a la recopilación, el almacenamiento y la presentación de esas pruebas”. Si bien la autora ha enfatizado en la utilidad de la *Blockchain* específicamente en materia de marcas, esta tecnología podría ser aplicada en términos de protección, registración e identificación de, tanto la Propiedad Industrial -v.gr. Invenciones patentables y modelos de utilidad, marcas, modelos y diseños industriales-, como la Propiedad Intelectual en el sentido estricto -derechos de autor y conexos-. Es decir, se podría evolucionar hacia una forma de registración que vaya más allá de las determinaciones administrativas de cada Estado, lo cual podría brindar mayor seguridad jurídica y transparencia.

Además, se habilitarían mayores facilidades en términos probatorios, ya que la creación de un sistema de esta índole permitiría obtener prueba fidedigna acerca de fecha y hora de uso de los DPI, frecuencia de uso efectivo, e incluso para determinar el carácter distintivo de una marca o la originalidad de una obra literaria o artística. De esta forma, existiría un consenso generalizado acerca de cómo determinar, por ejemplo, la novedad y/o aptitud inventiva en los casos concretos en los que se pretenda proceder a la registración de un determinado DPI. En conjunto con esto, empleando esta tecnología, sería más sencillo abordar la prueba de derechos no registrados.

Otra cuestión que creemos necesario abordar es la creciente tendencia al de-

sarrollo e intercambio de NFT's -*Non Fungible Tokens*- y su influencia en la PI. Un token es una unidad de valor basada en criptografía y emitida por una entidad privada en una *Blockchain* y puede utilizarse para representar la propiedad de objetos únicos como, por ejemplo, obras de arte. De hecho, observamos que numerosos artistas digitales están tokenizando sus obras a través de su transformación en NFT's. Si bien esto no impide la reproducción de estas obras, sí dota al archivo original de una firma que lo hace único. Es decir, ya se están viendo formas en las que, en la práctica, se utiliza la red *Blockchain* para la protección de los derechos de autor y, en sí, de los DPI.

Sin embargo, con los beneficios de esta tecnología también están surgiendo conflictos que se han judicializado como los casos “Nike INC. v. StockX LLC.”<sup>3</sup> o “Hermès International and Hermès of Paris, INC. v. Mason Rothschild”<sup>4</sup>. Aún es un interrogante cómo se resolverá esta cuestión en los tribunales, pero lo cierto es que se presentan cada vez más a medida que continúa avanzando su desarrollo. Ya constituye una necesidad que reclama la modernización y, además, que el DPI se adapte continuamente a estos avances.

En esta línea, debemos cuestionarnos cómo resulta viable compatibilizar el interés de los Estados en concentrar la registración de DPI con las amplias oportunidades que ofrece utilizar la tecnología *Blockchain* para su protección. Nuestro análisis no pierde de vista que muchos países en materia de PI establecen normas de jurisdicción exclu-

siva en relación al litigio de ciertos aspectos vinculados a la PI, industrial y derechos análogos.

Consideramos necesario plantear múltiples interrogantes, como por ejemplo: ¿Resignarían los Estados sus jurisdicciones locales para propiciar la creación de un sistema descentralizado y global de registración y protección de PI? ¿Dejarían de lado la mera territorialidad para avanzar hacia un reconocimiento más amplio? ¿Hasta qué punto y a través de qué instrumentos se podría tender hacia una mayor homogeneización de la normativa de fondo? Sin dudas, resolver todo ello implicará, como bien enuncia el título del CAI+D, “un nuevo paradigma de reconstrucción material y procesal”.

Es claro: el camino a transitar en el análisis de la sinergia entre Tecnología *Blockchain* y DPI es arduo y complejo, pero de insospechada importancia para la vida colectiva e individual, lo cual lo convierte en una aventura apasionante, no solo desde la perspectiva del análisis del fenómeno en tiempos de gobernanza global -donde la soberanía territorial de la PI se redefine-, sino porque el mismo principio actúa como paradigma de proyección y protección de varios derechos que actúan en conjunto.

1 “CAI+D 2020: Plan de Trabajo del Proyecto “Derecho Internacional Privado y Tecnología: ¿Un nuevo paradigma de reconstrucción material y procesal?”.

2 CLARK, B (2018). “La tecnología de la cadena y el Derecho de propiedad intelectual: ¿una pareja perfecta en el criptoespacio?”. *WIPO Magazine*, 2018, disponible en:

[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2018/01/article\\_0005.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2018/01/article_0005.html).

3 United States District Court for the Southern District of New York. Nike, Inc. (Plaintiff) v. Stockx LLC (Defendant). Case No. 22-cv-983, disponible en: <https://heitnerlegal.com/wp-content/uploads/Nike-v-StockX.pdf>.  
4 United States District Court for the Southern District of New York. Hermés International and Hermés of Paris INC. (P.) v. Stockx LLC (D.). Disponible en: <https://www.documentcloud.org/documents/21181175-hermes-international-vs-mason-rothschild?responsive=1&title=1>.

## BIBLIOGRAFÍA

CARBALLO PINEIRO, L. / KRAMER, S., “The role of private international law in contemporary society: global governance as a challenge”, *Erasmus Law Review*, n° 3., 2018.

CLARK, B., “Blockchain and IP Law: A Match made in Crypto Heaven?”, *WIPO Magazine*, 2018. Disponible en: [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2018/01/article\\_0005.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0005.html).

DE VAUPLANE, H., “Blockchain and Conflict of Law”, *RTDF-Doctrine*, n° 4, 2017.

GÜRKAYNAK, G. / YILMAZ, I. / YEŞİLALTAY, B.; BENGI, B., “Intellectual Property Law and Practice in the Blockchain Realm”. *Elsevier Magazine*, 2018, : <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0267364918302218>.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, A.M. , “Ley aplicable a los smart contracts y Lex Cryptographia”. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 13, n° 1, 2020.

JÓVENES INVESTIGADORES/AS  
POSTER  
2022



Reyna, Rosario María – Argentina – Universidad Nacional del Litoral  
**Pensar más allá de la territorialidad: La influencia de la tecnología Blockchain en el Derecho de la Propiedad Intelectual**



Categoría: Estudiantes avanzados/as de la carrera de Derecho

**Perfil de la autora**

**Abogada** por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.  
**Becaria** de Iniciación a la Investigación Científica de la misma Universidad.

**Directora:** All, Paula María.

**Proyecto de investigación institucional:** CAI+D "Derecho Internacional Privado y Tecnología: ¿Un nuevo paradigma de reconstrucción material y procesal?"

**Objetivo general**

**Explicar** el impacto de la **Blockchain** en la gestión de los **Derechos de la Propiedad Intelectual**, analizando las diversas aplicaciones -y oportunidades- de esta innovación en términos de **registro** e **identificación**.

**Abordar** la **contraposición** entre la característica de **descentralización** de la Blockchain y el **principio de territorialidad** aplicado en términos de **DPI**.

**¿Blockchain y Propiedad Intelectual?**

Nos encontramos frente a una problemática que reviste una complejidad sin precedentes en el plano jurídico, y que plantea un cambio de paradigma en innumerables aspectos a partir del surgimiento de una tecnología disruptiva. El objeto de nuestra investigación es analizar la interacción entre la **Blockchain** -surgida en el seno de una posible **Cuarta Revolución Industrial**- con un aspecto "clásico" del Derecho: la **Propiedad Intelectual**.



**Artistas digitales** están tokenizando sus obras a través de su transformación en **NFT's**. Si bien esto no impide la reproducción de estas obras, sí dota al archivo original de una firma que lo hace único. Es decir, ya se están observando formas en las que, en la práctica, se utiliza la red **Blockchain** para la **protección de los derechos de autor**.

Fuente imagen: <https://bit.ly/3WuZ1t3>

**Metodología**

- Método **deductivo**
- **Análisis cualitativo** de documental y normativa de **hard law** y **soft law**, de fuente interna e internacional
- **Marco conceptual** elaborado con análisis de bibliografía específica y construcción de protocolos de análisis de unidades informantes identificadas

**Bibliografía**

**CARBALLO PINEIRO, L.; KRAMER, S.**, (2018). "The role of private international law in contemporary society: global governance as a challenge", *Erasmus Law Review*, nº3.  
**CLARK, B.** (2018). "Blockchain and IP Law: A Match made in Crypto Heaven? *WIPO Magazine*. Disponible en: [www.wipo.int/wipo\\_magazine](http://www.wipo.int/wipo_magazine).  
**DE VAUPLANE, H.** (2017). "Blockchain and Conflict of Law", *RTDF-Doctrine*, nº 4.  
**LÓPEZ RODRÍGUEZ, A.M.** (2020). "Ley aplicable a los smart contracts y Lex Cryptographia", *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 13, nº 1.

**Pero...**  
¿Es posible un Derecho de la **Propiedad Intelectual descentralizado y extraterritorial?**

Fuente imagen: <https://bit.ly/3T4K0Lx>

**Reflexiones**

La **Blockchain** supone una **oportunidad única** para la gestión y aplicación de la **PI**. En tiempos de **gobernanza global** donde la soberanía territorial de la **PI** se redefine, la comunidad internacional debería aunar esfuerzos para **elaborar normas jurídicas** que se aglomeren a las necesidades actuales en términos de innovación. Resultaría fundamental **compatibilizar** el interés de los Estados en concentrar la **registro de DPI** con las amplias posibilidades que ofrece utilizar la tecnología **Blockchain** para su **protección**.

**Interrogantes**

¿Resignarán los Estados sus jurisdicciones locales para propiciar la creación de un **sistema descentralizado y global de registro y protección de PI?**

¿Dejarán de lado la **mera territorialidad** para avanzar hacia un reconocimiento más amplio?

¿Hasta qué punto y a través de qué instrumentos se podrá tender hacia mayor **homogeneización de la normativa de fondo?**

# A efetividade da aplicação das convenções internacionais para a responsabilização administrativa e para o combate à corrupção nos países que compõem o MERCOSUL

## Isabella SANT'ANA de OLIVEIRA

Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil)

Directora: Raizer Borges, Valesca

Palavras chaves: Mercosul, corrupção, convenções internacionais, responsabilização administrativa

### SÍNTESE DA APRESENTAÇÃO

Esta pesquisa foi realizada a fim de compreender a efetividade da aplicação das convenções internacionais para a responsabilização administrativa e para o combate à corrupção nos países que compõem o Mercosul, com exceção da Venezuela, que foi suspensa em 2016 e permanece enquanto não ocorrer o restabelecimento da ordem democrática na República Bolivariana da Venezuela, medida tomada em prol do bem-estar e do desenvolvimento do povo venezuelano. Assim, busca-se entender como cada Estado-Parte, de acordo com os princípios fundamentais de sua legislação interna, adota medidas de prevenção e de combate à corrupção, para também melhorar as normas contábeis e de auditoria no setor privado, assim como, procedimen-

tos de sanções civis, administrativas ou penais eficazes em caso de não cumprimento dessas medidas estabelecidas.

Nessa perspectiva, é necessário compreender que, apesar de ser um fenômeno atemporal, no cenário atual de globalização e pluriconectividade das relações se torna evidente que a corrupção deixou de ser um problema local para converter-se em um fenômeno transnacional que afeta todas as sociedades e economias, fazendo-se necessária a cooperação internacional para preveni-la e lutar contra ela.

É nessa perspectiva que as organizações internacionais, entendendo como o enriquecimento pessoal ilícito pode ser particularmente nocivo para as instituições democráticas, as economias nacionais e o Estado de Direito, instauraram a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Co-

mercias Internacionais, aprovada no âmbito da Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE) e a Convenção

Interamericana contra a Corrupção, que foram estudadas para a compreensão acerca da sua adoção, aplicação e efetividade.

Assim, restou evidente que identificar certas práticas corruptas como violações dos direitos humanos pode viabilizar a análise do problema da corrupção nas instâncias de direitos humanos que iria adicionar mais canais de comunicação e novos atores para o combate à corrupção. Além disso, alguns típicos mecanismos de direitos humanos (tribunais internacionais de direitos humanos, as queixas da ONU e os mecanismos ou instituições nacionais de direitos humanos) também podem ser úteis para resolver rupturas que violam as práticas de direitos humano.

O principal instrumento internacional sobre a corrupção é a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, aprovada em 2003 pela Assembleia-Geral da ONU, que tem como principal resultado obtido a criação de um mecanismo de monitoramento da implementação da convenção. Pelo acordo, todos os Estados serão monitorados a cada cinco anos, com o intuito de se avaliar como estão cumprindo suas obrigações. Essa Convenção prevê a criminalização da corrupção ativa dos agentes públicos nacionais (art. 15), dos funcionários públicos estrangeiros e funcionários de organização internacional pública (art. 16, 1) e deixa ao Estado a faculdade de

decidir sobre a sua criminalização da corrupção passiva, assim como do tráfico de influência (art. 18), abuso de funções do funcionário público (art. 19), enriquecimento ilícito (art. 20), suborno no setor privado (art. 21) e da malversação ou peculato de bens no setor privado (art. 22).

Já a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) foi firmada pelos Estados membros da OCDE, aos quais se somaram Brasil e Argentina. Tem por finalidade o combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros exclusivamente no contexto de transações comerciais internacionais e tratou de regular a responsabilidade penal da pessoa jurídica pela corrupção daquele funcionário público (art. 2.º); determinou a aplicação de sanções de natureza penal efetivas, proporcionais e dissuasivas da prática de corrupção ativa (art. 3.º); exigiu que os Estados partes adotassem as medidas necessárias no âmbito de suas leis e regulamentos sobre livros contábeis, para proibir que as empresas não registrassem, em contas expressas ou paralelas, operações de suborno de funcionários públicos estrangeiros (art. 8.º), além de outras medidas relacionadas com a repressão à lavagem de dinheiro proveniente daquela prática criminosa, extradição e assistência jurídica internacional. Esse dispositivo é bastante amplo.

Ele inclui qualquer tipo de comportamento da autoridade pública que possa vir a influenciar o curso de um negócio específico ou de transações

comerciais em geral, seja pelo fato de a Administração Pública estrangeira exercer um papel decisivo na transação ou mesmo ser parte contratante, seja, indiretamente, através de algum ato da administração que interfira na capacidade de transação das partes implicadas na negociação ou represente ainda uma vantagem ou desvantagem às partes quanto a transações futuras. O documento exige certa lealdade na instituição da punição a essas condutas, que não devem receber tratamento inferior ao já estabelecido pela ordem jurídica do Estado signatário. Isso se verifica quanto à punibilidade da tentativa e conspiração criminosa, que devem ficar estabelecidas caso sejam também puníveis no ordenamento pátrio (art. 1.º, 2), e quanto às sanções aplicáveis, que devem ter medida comparável às já existentes para os crimes de corrupção envolvendo o próprio funcionário público nacional (art. 3.º, 1) e caráter penal no caso das pessoas jurídicas, quando isso estiver de acordo com os princípios preestabelecidos pelo direito interno (art. 3.º, 2).

Na esfera de atuação dos países membros da Organização dos Estados Americanos (OEA), a Convenção Interamericana contra a Corrupção foi firmada por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, inspirada na necessidade de resguardarem-se a legitimidade das instituições públicas, a democracia representativa e o desenvolvimento integral dos povos e a sua previsão limita o combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros aos atos que estejam de alguma forma relacionados com uma transação de natureza econômica ou comercial.

Tratando da Legislação adotada por cada país, tem-se que o Brasil tem um amplo aparato legal que versa tanto na área de auditoria e fiscalização, quanto no campo de correição e prevenção à corrupção. Para ter acesso às leis, decretos, códigos de conduta e resoluções que regulamentam o assunto. A Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, chamada de Lei anticorrupção, trata da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas (empresas) pela prática de atos de corrupção contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e atende ao pacto internacional firmado pelo Brasil. Atualmente, estão, em vigor, no Brasil, a Convenção da OCDE, promulgada pelo Dec. 3.678/2000, a Convenção Interamericana contra a Corrupção, promulgada pelo Dec. 4.410/2002; e a Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional, promulgada pelo Dec. 5.015, de 12.03.2004. A Lei 10.467/2002 promoveu as respectivas mudanças legislativas, no Código Penal (LGL\1940\2) e na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98), tipificando no direito interno os crimes de corrupção ativa e tráfico de influência em transação comercial internacional, além do crime de lavagem de dinheiro proveniente dos ilícitos penais mencionados. Mais recentemente, em 15.12.2003, o Brasil assinou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.

Na Argentina, De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal argentina, a documentação e a informação da Administração Pública Nacional têm caráter de "documentação pública", de livre acesso a qualquer instituição ou pessoa interessada. Em sua página de transparência, o governo da Argentina apresenta

a legislação vigente, declarações patrimoniais e o acesso à informação pública. A Lei nº 27.401 é baseada nas principais leis anticorrupção do mundo, como a *FCPAe Bribery Act*, e prevê duras punições para as empresas e políticos por atos de corrupção nacional e transnacional, tráfico de influência, enriquecimento ilícito e extorsão cometida por funcionário público, entre outras. A lei prevê a responsabilização de empresas por atos cometidos sob sua direção, em seu nome, seu benefício ou interesse. No Uruguai, na página Uruguay Transparente, é possível acessar o marco legal do país sobre corrupção, incluindo normas referentes ao uso indevido do poder público, proteção a dados pessoais e ação de *habeas data* e o direito ao acesso à informação pública. Por fim, no Paraguai a medida mais expressiva recentemente adotada foi o “Selo Integridade”, iniciativa que integra um conjunto de ações de combate à corrupção e fraudes que tem sido desenvolvida por aquele país, ao longo dos últimos anos, o Selo pretende contribuir para uma mudança estrutural em seu país, na construção de uma nova maneira de fazer negócios, que tenha como base uma cultura de integridade e ética. O selo foi lançado com o apoio do projeto de cooperação técnica trilateral, “Fortalecendo a Integridade em Tempos de Crise”, que tem como foco o combate à corrupção na gestão pública. A iniciativa integra o portfólio de ações do Programa de Cooperação Técnica Brasil-Alemanha.

*privado - teoria e prática brasileira*, 3. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

BELTRAME, Adriana, "Cooperação jurídica internacional", *Revista de Processo*, vol. 162, 2008, p. 187 - 196. Disponível em: <<https://www.revistadoatribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad82d9a00000183848fa6f573125c9d&docguid=1a7d98050f25711dfab6f010000000000&hitguid=1a7d98050f25711dfab6f010000000000&spos=1&epos=1&td=4000&context=5&crumb-ac tion=append&crumb-label=Documento&isDocFG=true&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1>>.

UNODC, Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Unodc.org, 2022. Disponível em: <[https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics\\_corruption/Publicacoes/2007\\_UNCAC\\_Port.pdf](https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_corruption/Publicacoes/2007_UNCAC_Port.pdf)>.

## REFERÊNCIAS

ARAUJO, Nadia, *Direito internacional*

JÓVENES INVESTIGADORES/AS  
POSTER

2022



Isabella Sant'Ana- Brasil - Universidade Federal do  
Espírito Santo

A adoção, aplicação e efetividade das Convenções Internacionais para o combate à corrupção  
nos Estados-Parte do Mercosul

Governança Global, Direitos Humanos e Direito Internacional privado



Perfil do/a autor/a

Acadêmica de Direito, cursando o 4º período da Graduação, presidente da Sociedade de Debates da UFES, diretora de Ação Social do Centro Acadêmico, membra da Liga Universitária do Direito, membra da Liga do Mercado Financeiro da Universidade e membra de grupo de pesquisa de Direito Constitucional registrada no CNPQ.

Marco teórico. Hipótese do trabalho.

Compreender como os países do Mercosul adotam as Convenções Internacionais, com recorte focado na Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, a Convenção Interamericana contra a Corrupção e a Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da OCDE. Assim, busca-se entender como cada Estado-Parte adota e aplica essas convenções, bem como sua efetividade na prevenção da corrupção e também seus procedimentos de sanção civil, administrativa ou penal em caso de descumprimento das medidas estabelecidas.

Ademais, cabe entender a importância do exercício da cooperação jurídica internacional nesse assunto, visto que essa no âmbito do direito é uma realidade que tem estreitado os laços entre os Estados soberanos e compreende a cooperação entre jurisdições diversas, assim como a consolidação um ato internacional.

É necessário compreender que, apesar de ser um fenômeno atemporal, no cenário atual de globalização e pluriconexidade das relações se torna evidente que a corrupção deixou de ser um problema local para converter-se em um fenômeno transnacional que afeta todas as sociedades e economias, fazendo-se necessária a cooperação internacional para preveni-la e lutar contra ela. É nessa perspectiva que as organizações internacionais, entendendo como o enriquecimento pessoal ilícito pode ser particularmente nocivo para as instituições democráticas, as economias nacionais e o Estado de Direito, instauraram as Convenções Internacionais, com a preocupação na adequação das medidas aos princípios e legislações internas de cada país, assim como a solução de qualquer controvérsia ou conflito de leis que possa ocorrer entre os países.

Atualmente, o principal instrumento internacional sobre a corrupção é a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. O Capítulo III da Convenção prevê a criminalização da corrupção ativa dos agentes públicos nacionais (art. 15), dos funcionários públicos estrangeiros e funcionários de organização internacional pública (art. 16, 1) já a corrupção passiva praticada pelos funcionários públicos de outros países e das organizações internacionais, é deixado às considerações do Estado signatário a adoção de medidas para a sua transformação em delitos penais (art. 16, 2) a Convenção deixa igualmente ao Estado a faculdade de decidir sobre a sua criminalização, como o tráfico de influência (art. 18), o abuso de funções do funcionário público (art. 19), o enriquecimento ilícito (art. 20), o suborno no setor privado (art. 21), a malversação ou peculato de bens no setor privado (art. 22). Apenas o art. 17 ("malversação ou peculato, apropriação indébita ou outras formas de desvio de bens por um funcionário público") obriga realmente os países à adoção de medidas legislativas e de outras índoles que sejam necessárias para qualificar as condutas como delito.

Na esfera de atuação da Organização dos Estados Americanos (OEA) surge a Convenção Interamericana contra a Corrupção, inspirada na necessidade de resguardarem-se a legitimidade das instituições públicas, a democracia representativa e o desenvolvimento integral dos povos, ela limita o combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros aos atos que estejam de alguma forma relacionados com uma transação de natureza econômica ou comercial. Já a Convenção firmada pelos Estados membros da OCDE, aos quais se somaram Brasil, Argentina, Bulgária, Chile e República Eslovaca, tem no centro das atenções a preocupação da Organização em resguardar sobretudo as condições internacionais de competitividade, afirmada no Preambulo, ainda que outros objetivos sejam igualmente mencionados, como a necessidade de preservação da boa governança e a desenvolvimento econômico dos países. Esse dispositivo é bastante amplo. Ele inclui qualquer tipo de comportamento da autoridade pública que possa vir a influenciar o curso de um negócio específico ou de transações comerciais em geral. O leque de possibilidades se abre ainda mais quando se considera que a Convenção inclui na expressão funcionários públicos os funcionários e representantes de Organizações Públicas Internacionais.

Metodología da pesquisa

Para essa pesquisa será adotado o método qualitativo, através da realização de análise e revisão bibliográfica acerca do tema, e também do método comparativo, com a comparação dos cenários vigentes nos países integrantes do Mercosul, analisando prioritariamente a realidade legislativa no que tange à adoção e aplicação das convenções internacionais.

Bibliografia

ARAÚJO, Nucleo de. *Direito internacional privado - temas e prática brasileira*. 3. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

BELTRAME, Adriana. *Cooperação jurídica internacional*. Revista de Processo, vol. 102/2008, p. 157 - 196, Ago. 2009.

UNODC. *Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção*.

Resultados / Reflexões

Pensou-se que o Brasil tem um amplo aparato legal que conta tanto na área de autuação e fiscalização, quanto no campo de prevenção e investigação à corrupção. No entanto, é possível avaliar o marco legal no país sobre corrupção, incluindo normas referentes ao uso interno do poder público, prestação a dados pessoais e ação de habeas data e a direito ao acesso a informação pública. Na Argentina, De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal Argentina, a documentação e a informação da Administração Pública Nacional tem caráter de "documentação pública", de livre acesso a qualquer instituição ou pessoa interessada. Em sua página de transparência (em espanhol), o governo da Argentina garante a transparência jurídica, documentação patrimonial e o acesso a informação pública. No Paraguai, "Selo Integridade" Instituto que integra um conjunto de ações de combate à corrupção e transparência que tem sido desenvolvida por vários anos, ao longo dos últimos anos.

# Falência transnacional e adesão da Lei Modelo sobre Insolvência Transnacional da UNCITRAL no Brasil

**Maria Victória STEFONI FINAMORE SIMON**  
**Davi SALAZAR**  
**Lucas BRAGA**

Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil)

Directora: Raizer Borges, Valesca

Palavras chaves: falência transnacional, adesão, Lei Modelo, UNCITRAL, Brasil

## DA INSOLVÊNCIA TRANSNACIONAL

As grandes navegações, ocorridas na Europa durante os séculos XV e XVI, impulsionaram o comércio transfronteiriço, dando origem à *lex mercatoria*, que constitui um conjunto de regras utilizadas globalmente baseadas nos usos e costumes mercantis. Atualmente, com os efeitos da globalização, observa-se uma nova feição para a *lex mercatoria*, que pode ser entendida como as Leis Modelo da UNCITRAL.

A globalização, fenômeno irrefreável que se intensificou no século XXI, tornou os países e seus respectivos sistemas jurídicos mais conectados, possibilitando o aumento de empresas

multinacionais, proprietárias de bens sob o respaldo de mais de uma jurisdição. Outrossim, em razão das crises cambiais do capitalismo financeiro sucedidas na década de 90, surgiu a necessidade de uma legislação uniformizada na matéria de insolvência transfronteiriça, para tratar das falências e recuperações judiciais que poderiam surgir no âmbito internacional.

As consequências dos processos de insolvência em âmbito global podem ter reflexos nos interesses de todos aqueles que permeiam a atividade econômica. Destarte, torna-se importante tratar do assunto para o desenvolvimento da economia do país. Para os fins de decidir se o país irá receber investimentos econômicos ou não, observa-se o tratamento que é dado para o caso do empreendimento não lograr êxito. Além disso, conforme a Análise Econômica do Direito (AED), o Direito aliado à economia

deve agir para garantir um ambiente institucional estável e, assim, promover a eficiência do mercado.

Nessa conjuntura, surgiu a Lei Modelo sobre insolvência transnacional da UNCITRAL em 1997, criada pela ONU, baseada nas aspirações universalistas da *Section 304* do *Bankruptcy Code* dos EUA, a fim de consolidar e harmonizar o entendimento sobre o tema. Esta lei constitui uma *soft law*, ou seja, é adaptável e flexível ao contexto dos países que a aderirem e representa um instrumento que propicia previsibilidade e segurança jurídica, por meio da cooperação entre as jurisdições. Dessa forma, oferece con-fiança aos investidores, a possibilidade de maximização do valor dos ativos do devedor e a preservação do emprego.

## ADOÇÃO PELO BRASIL DA LEI MODELO

A Lei 14.112/2020 inseriu na Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária no Brasil, o capítulo VI-A, sobre insolvência transnacional, que foi baseado na Lei Modelo da UNCITRAL.

A insolvência transnacional configura-se quando há, em um país, um processo estrangeiro de insolvência, mas o devedor possui, em outro país, ativos e/ou estabelecimentos em funcionamento. Sendo aqui, “estabelecimento” entendido como “qualquer local de operações em que o devedor desenvolva uma atividade econômica não transitória com o emprego de recursos

humanos e de bens ou serviços.” (Lei n. 11.101/2005, art. 167-B, VI).

A partir disso, o Brasil evoluiu de um modelo territorialista de tratar do assunto, relacionado à soberania nacional, no qual os processos de falência de um mesmo devedor eram tratados de forma individual, para um modelo pós-universalista, que prevê a cooperação entre as jurisdições e uma convivência mútua entre o processo principal e os secundários. Isto possibilitou a ampliação da responsabilidade das empresas em um âmbito internacional, de forma a evitar prejuízo aos credores.

Dentre as finalidades da reforma da Lei 11.101/2005, previstas no art. 167-A e que são baseadas no preâmbulo da Lei Modelo da UNCITRAL, citam-se: a necessidade de segurança jurídica para garantir a atividade econômica e o investimento, por meio da cooperação entre os juízos, bem como facilitar o resgate da empresa com problemas financeiros.

A cooperação entre o juízo brasileiro e o juízo estrangeiro foi regulada na Resolução 394 do Conselho Nacional de Justiça de forma direta, rápida e desvinculada de formalidades, como carta rogatória e tradução juramentada. Os protocolos de insolvência firmados por ambos os juízos, sem desrespeito às diferenças entre as diversas leis processuais dos países envolvidos na insolvência transnacional, estipulam as regras que permeiam essa colaboração.

Quando for possível mais de uma interpretação das disposições da lei, a primazia é aquela que cumpra o objetivo

de cooperação internacional na medida em que padronize a aplicação da lei e atenda à boa-fé. No entanto, se a partir da análise do caso concreto, se verificar que a aplicação das disposições do Capítulo VI-A da Lei 11.101/2005 reproduz uma manifesta ofensa à ordem pública porquanto afronta as normas fundamentais do país, prevalece a ordem pública nacional.

## **DO ACESSO À JURISDIÇÃO BRASILEIRA**

Para o acesso à jurisdição brasileira, são apresentados uma série de documentos no juízo do centro dos principais interesses do devedor, que serão presumidos válidos, tornando o reconhecimento mandatário. Caso as circunstâncias mudem, é permitido a modificação da decisão, o que impõe um dever de informação, segundo os arts. 15, 16, 17 e 18 da Lei Modelo.

Ao se tratar da insolvência transnacional, quem possui acesso à jurisdição brasileira são os representantes estrangeiros: pessoas ou órgãos autorizados no processo estrangeiro a administrar os bens, ou a atuar como representantes do processo estrangeiro e possuem legitimidade procedimental para atuar em todas as fases do procedimento: postulando, implementando e defendendo os interesses do processo de insolvência transnacional. Eles são os elementos de conexão principal entre as jurisdições “alienígenas” e as brasileiras.

Esses representantes são, geralmente, auxiliares da autoridade de insolvência

estrangeira ou alguém com atribuições de poder de polícia ou de Ministério Público, no âmbito da jurisdição estrangeira, fazendo com que surja uma cooperação harmônica entre o Magistrado de insolvência brasileiro e o estrangeiro.

Contudo, isso não permite que eles possuam capacidade postulatória direta, devendo sempre serem representados por algum advogado brasileiro com a OAB ativa, a fim de evitar pedidos não respaldados pela jurisdição brasileira.

É importante salientar, que os representantes estrangeiros se equiparam a funcionários públicos estrangeiros quanto aos crimes contra a administração pública, logo, possuem sanções cíveis e penais.

Pelo reconhecimento do “Processo Principal” como o estrangeiro, o Sistema Brasileiro de Insolvência Transnacional deve aceitar assistir e cooperar com seu resultado, sob a coordenação de um Magistrado de insolvência estrangeira e seu representante.

## **COMI E FÓRUM SHOPPING**

O procedimento da insolvência transnacional, através do protocolo de insolvência, figura um processo como sendo o principal, estabelecido a partir do reconhecimento do local do principal estabelecimento do devedor e os demais como processos secundários. Estes são os iniciados em outras localidades, que não o centro de interesses principais (CIP), onde a empresa possui ativos que devem ser apresentados no processo de

insolvência. Para a definição do CIP é necessário que as atividades sejam exercidas no mercado envolvendo terceiros e estejam acessíveis para que alheios, em particular os credores da empresa, estejam cientes da existência delas.

Essa definição é importante para evitar a prática do forum shopping, utilizado como uma estratégia de defesa dos interesses do devedor na medida em que as partes abusam da condição de eleição do foro competente de julgamento desperdiçando recursos do sistema judiciário e burlando o procedimento com o objetivo de atingir os pagamentos devidos no seu conteúdo, forma ou valores. O que demonstra o caráter não autêntico, ineficiente e de má-fé do instituto.

## CONCLUSÃO

Através de estudos sobre a insolvência transnacional em diversas doutrinas falimentares, análise de casos concretos e comparação entre jurisdições, constatou-se que a introdução do Capítulo VI-A na Lei 11.101/2005, além de facilitar a cooperação entre juízes e as demais autoridades competentes do Brasil e de outros países, contribuiu para ampliar as relações em nível global, aumentando a segurança jurídica para atividades econômicas e investimentos. Dessa forma, garante-se uma administração justa e eficaz, prezando pela segurança do emprego e pela satisfação do credor da forma mais eficiente possível, minimizando suas perdas.

Além disso, a forma de lidar com a in-

solvência, no contexto atual, é um dos aspectos

Além disso, a forma de lidar com a insolvência, no contexto atual, é um dos aspectos importantes e levados em consideração para a ascensão de um país na classificação do *Doing Business*, um ranking criado por economistas do Grupo Banco Mundial (*The World Bank*) que classifica os países, de 1 a 190, em termos da facilidade de fazer negócios. Ou seja, o Brasil, melhorando essas relações, e se aprofundando nas pesquisas sobre a insolvência transfronteiriça, faria com que ativos fossem atraídos para o país, beneficiando diretamente a prosperidade econômica.

Contudo, embora isso tenha ocorrido em um passado recente, vemos que ainda há discussões a serem suscitadas a fim de melhorar e facilitar esse processo. Cabe ressaltar as possíveis problemáticas que podem se desenvolver em razão dos processos de insolvência transnacional. O que poderá ocorrer quando o devedor brasileiro possuir um crédito oriundo de um país que não adota a Lei Modelo da UNCITRAL? E se os devedores transferirem seus ativos para estes países? Será possível alcançá-los? Além disso, mesmo para os Estados que adotam a Lei Modelo, na prática, a cooperação entre os juízes será eficiente? E se houver o descumprimento desta colaboração?

Esses são questionamentos que permeiam o tema da insolvência transnacional. Mas, apesar deles, acredita-se que o avanço das pesquisas sobre a matéria, acompanhado de seu amplo debate e normatização, estimularia a atração de investimentos para o Brasil, demonstrando que o país possui uma

visão cooperativa e globalizada, em sintonia jurídica com as grandes potências econômicas.

## REFERÊNCIAS

COSTA, Daniel Carnio. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência: lei 11.101, de 09/02/ 2005. 3. ed. rev. atual. Curitiba: Juruá, 2022.

COSTA, Daniel Carnio. Sistema brasileiro de insolvência transnacional. Curitiba: Juruá, 2022

ALBUQUERQUE, Julia, FRIGOTTO, Alexandra, DE OLIVEIRA, Ana Luisa, SALES, Gabriela. Reflexões sobre a evolução da insolvência transnacional no Brasil: construção dessa nova jurisprudência contribuirá e incentivará o investimento estrangeiro no Brasil. Revista Digital Jota, artigo publicado em 09/09/2021. Disponível em: <<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/elas-no-jota/reflexoes-sobre-a-evolucao-da-insolvencia-transnacional-no-brasil-09092021>>

FLÓREZ, Gustavo. A falência transnacional: diálogos entre o direito internacional e o direito brasileiro. Monografia publicada em 2018, Brasília, pela UnB (Universidade de Brasília), Faculdade de Direito. Disponível em: <[https://bdm.unb.br/bitstream/10483/23144/1/2018\\_GustavoAndresBermudezFlorez\\_tcc.pdf](https://bdm.unb.br/bitstream/10483/23144/1/2018_GustavoAndresBermudezFlorez_tcc.pdf)>United Nations Commission On International Trade Law. Status: UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997). Disponível em: <<https://uncitral.un.org/en/texts/insolven>

JÓVENES INVESTIGADORES/AS  
POSTER  
2022



Davi Bodart, Lucas Pereira e Maria Victória Simoni - Brasil -  
Universidade Federal do Espírito Santo

Falência transnacional e adesão da Lei Modelo sobre Insolvência  
Transnacional da UNCITRAL no Brasil.

Categoria A



Perfil do/a autor/a

Maria Victória Simoni de oliveira da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Formada pelo Centro Educacional Leonardo da Vinci (2020). Formada pelo ensino médio americano da University of Missouri-Columbia (2017-2021), período em que foi membro da National Honor Society, organização não-governamental baseada nos critérios de desempenho acadêmico, serviços voluntários, liderança e personalidade cooperativa. Participou dos cursos de Inglês - nívelação (2017), Inglês de 2017, 2018, 2019 e 2020. Membro da equipe capilar - banco de qualificação jurídica.

Lucas: Estudante de graduação em Direito na Universidade Federal do Espírito Santo. Involvemento em práticas jurídicas e leitura de doutrina jurídica. Formado em Técnico em Redes Integrado ao Ensino Médio (2018-2019) pelo Instituto Federal do Espírito Santo.

Davi: Estudante de direito da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Formado pelo Centro Educacional Primeira Mão (2017), em parceria com a Universidade Britânica (Cambridge University, onde adquiriu fluência em inglês e certificação "Flyers" de ensino). Estudou também no Centro Educacional Charles Darwin (2018-2021), participou do projeto "Vestibular do vestibular", em que são selecionados alunos que obtiverem as melhores notas e aprovações por universidades em todo o Brasil.

Coordenadora: Prof Valesca Raizer Borges Moschen

Marco teórico / Hipótese do trabalho

As grandes negociações, ocorridas na Europa durante os séculos XV e XVI, implicaram o comércio transnacional, dando origem à "lei mercatoria", que reuniu um conjunto de regras criadas geralmente baseadas nos usos e costumes mercantis. Atualmente, com os efeitos da globalização, observou-se uma nova feição para a "lei mercatoria", que passa ser entendida tanto as Lei Modelo da UNCITRAL.

A globalização, no âmbito ambiental da década 2000, trouxe ao palco a sua respectiva sistemas jurídicos mais conectados, possibilitando o aumento de empresas multinacionais, proprietárias de bens sob o regime de mais de uma jurisdição. Contudo, em razão dos ritos cambiais do capitalismo financeiro, evidenciou na década de 90, surgiu a necessidade de uma legislação unificada na matéria de insolvência transnacional, para tratar das falências e recuperações judiciais que poderiam surgir no âmbito internacional.

Até o início de estudos sobre a insolvência transnacional em diversas doutrinas falimentares, o cenário nesse campo acadêmico tendia de analisar o panorama atual. Com a análise de casos concretos e comparação entre jurisdições, constatou-se que a introdução do Capítulo VI-A na Lei 11.101/2005, além de facilitar a cooperação entre juízes e as demais autoridades competentes do Brasil e de outros países, contribuiu para ampliar as relações em nível global, aumentando a segurança jurídica para atividades econômicas e investimentos. Isto garante uma administração justa e eficaz, prezando pela segurança do emprego e pela satisfação do credor da forma mais eficiente possível, minimizando suas perdas.

Além disso, a falta de falar com a insolvência, no contexto atual, é um dos aspectos importantes e levados em consideração para a obtenção de um país na classificação de "Doing Business", um ranking criado por economistas do Grupo Banco Mundial (The World Bank) que classifica os países, de 1 a 191, em termos de facilidade de fazer negócios. O país, a nível global, melhorando essas relações, e se aprofundando nas pesquisas sobre a insolvência transnacional, tanto com seu nível teórico abstrato para o país, quanto evidenciando a possibilidade econômica.

● As imagens devem respeitar as normas de direitos autorais

Índice	Brasil	Países em desenvolvimento	Países de alta renda	Países de renda média alta
Facilidade de fazer negócios	119	111	111	111
Facilidade de obter crédito	119	111	111	111
Facilidade de fazer negócios	119	111	111	111
Facilidade de obter crédito	119	111	111	111
Facilidade de fazer negócios	119	111	111	111
Facilidade de obter crédito	119	111	111	111
Facilidade de fazer negócios	119	111	111	111
Facilidade de obter crédito	119	111	111	111
Facilidade de fazer negócios	119	111	111	111
Facilidade de obter crédito	119	111	111	111

Tabela 01: Medindo a regulamentação do ambiente de negócios - Doing Business  
Fonte: The World Bank.



Metodologia da pesquisa

Através de estudos sobre a insolvência transnacional em diversas doutrinas falimentares, análise de casos concretos e comparação entre jurisdições, constatou-se que a introdução do Capítulo VI-A na Lei 11.101/2005, além de facilitar a cooperação entre juízes e as demais autoridades competentes do Brasil e de outros países, contribuiu para ampliar as relações em nível global, aumentando a segurança jurídica para atividades econômicas e investimentos. Dessa forma, garante-se uma administração justa e eficaz, prezando pela segurança do emprego e pela satisfação do credor da forma mais eficiente possível, minimizando suas perdas.

Bibliografia

- COSTA, Daniel Carmo. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência: lei 11.101, de 04 de fevereiro de 2005. 3. ed. rev. atual. Curitiba: Juruá, 2012.
- FLORES, Gustavo. A falência transnacional: diálogo entre o direito internacional e o direito brasileiro. Monografia jurídica em 2018, São Paulo (Universidade de Brasília). Faculdade de Direito. Disponível em: <https://bdm.unb.br/bitstream/10482/33144/1/2018\_Gustavo%20Flores%20Jur.pdf>. Acesso em 28/10/2022.
- Grupo Banco Mundial. Comercio Da Informacao De Trade Law. Grupo UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997). Tabela informativa de United Nations. Disponível em: <http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral/en/uncitral/insolvency/insol.html>. Acesso em 28/10/2022.

Resultados / Reflexões

Contudo, embora isso deus-se em um passado recente, vemos que ainda há discussões a serem suscitadas a fim de melhorar e facilitar esse processo. Cabe ressaltar as possíveis problemáticas que podem se desenvolver em razão dos processos de insolvência transnacional. O que poderá ocorrer quando o devedor brasileiro possuir um crédito oriundo de um país que não adota a Lei Modelo da UNCITRAL? E se os devedores transferirem seus ativos para estes países? Será possível alcançá-los? Além disso, mesmo para os Estados que adotam a Lei Modelo, na prática, a cooperação entre os juízes será eficiente? E se houver o descumprimento desta colaboração?

Essas são questionamentos que permeiam o tema da insolvência transnacional. Mas, apesar deles, acredita-se que o avanço das pesquisas sobre a matéria, acompanhado de seu amplo debate e normatização, estimula a atração de investimentos para o Brasil, demonstrando que o país possui uma visão cooperativa e globalizada, em sintonia jurídica com as grandes potências econômicas.

# Convenção de Singapura sobre Acordos em Mediação Aplicada aos Contratos de Transporte Marítimo Internacional de Mercadorias e o Cenário Brasileiro

**Amanda ZAQUI MILAGRE**

Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil)

Directora: Raizer Borges, Valesca

Palavras chaves: cooperação jurídica, mediação comercial internacional, Convenção de Singapura, transporte marítimo

## Resumo

O processo de globalização guarda intrínseca relação com o desenvolvimento dos transportes em escala mundial. O crescente fluxo de mercadorias, principalmente por intermédio do transporte marítimo, motivou a internacionalização das relações sociais (MOSCHEN, 2021, p. 68) ao conectar fornecedores e clientes de várias partes do mundo. Assim, o transporte de mercadorias por via marítima configura como um recurso logístico e estratégico para a viabilidade do comércio internacional, uma vez que garante a circulação de bens e produtos com o fito de atender à demanda global.

Sob esse viés, o contrato de transporte

marítimo de mercadorias opera como peça-chave para a perfeita conclusão daquilo que foi estabelecido na relação contratual de compra e venda internacional. Por contrato de transporte marítimo internacional de mercadorias, entende-se ser aquele em que o transportador (“*carrier*”) contrai uma obrigação, mediante remuneração, de transportar de um porto para o outro uma quantidade determinada de mercadoria enviada pelo embarcador (“*shipper*”), e entregá-la a um destinatário (“*receiver*”) (MARTINS, 2012, p.153).

A crise sofrida pela economia global, em decorrência do período pandêmico e pós-pandêmico, perturbou as cadeias de abastecimento marítimo em todo o mundo (UNCTAD, 2022, p. 93). A cadeia marítima se desestabilizou frente a uma “espiral de reações”: ausência de procura em decorrência do *lockdown*; decréscimo das transações econômicas e da

produção; dificuldades em torno do recolhimento das cargas; etc. (UNCTAD, 2022, p. 93).

Durante o primeiro ano de pandemia, o transporte marítimo de mercadorias foi impactado de forma severa. As interrupções a nível local produziram efeitos em escala global, como, por exemplo, os congestionamentos portuários e o aumento das tarifas de frete.

A pandemia, portanto, expôs o alto nível de interdependência entre os países (UNCTAD, 2022, p. 8), frente a rupturas na cadeia de fornecimento, contração da demanda e incerteza econômica no cenário internacional.

Em razão disso, os contratantes passaram a lidar não só com os imprevistos que decorrem, naturalmente, da relação comercial em si, mas também com as preocupações imediatas levantadas pela crise. Surgiu, então, a necessidade de se adaptar às regras gerais e aos protocolos estabelecidos a toda a cadeia de abastecimento marítimo, visando conciliar, dentro do possível, a contenção do vírus e as atividades econômicas. Para além disso, os contratantes tiveram que traçar considerações a longo prazo, relacionadas a mudanças no sistema de abastecimento e nos hábitos de consumo, o que, de certo modo, contribui para potencializar litígios.

Mesmo em países que optaram por não tomar medidas rigorosas em relação à pandemia, como é o caso do Brasil, as autoridades portuárias optaram por revisar os procedimentos existentes face à crise emergente (UNCTAD, 2022,

p. 40). Os acessos por via marítima no país permaneceram abertos sem quaisquer restrições. De toda sorte, a operação dos portos brasileiros se deu com base em critérios estabelecidos pelas autoridades sanitárias, reforçando medidas protetivas como a redução do número de trabalhadores em todas as atividades (UNCTAD, 2022, p. 89).

Em meio ao cenário do comércio exterior, os desafios enfrentados pelo transporte marítimo internacional, em vista à interdependência global, afetaram, também, as empresas brasileiras. No Brasil, o transporte de mercadorias é uma atividade de caráter tipicamente transnacional, uma vez que é exercido principalmente em função da exportação de produtos advindos dos segmentos da indústria de transformação, da indústria extrativa e da agropecuária.

Para gerenciar a crise, as transportadoras tiveram de revisar suas estratégias, a fim de superar os desafios à continuidade comercial e operacional. À vista disso, a gestão das instabilidades sofridas no âmbito contratual em matéria de transporte marítimo de mercadorias deve ser ajustada a partir de um meio compatível com o cunho essencialmente privatista dessas relações comerciais. Sendo assim, entende-se que as empresas do ramo devem investir na autocomposição antes de optar pelas vias heterocompositivas, consoante a tendência de desjudicialização dos conflitos.

A mediação, compreendida como um procedimento pelo qual as partes procuram chegar a uma solução amigável para a sua disputa com o auxílio de um terceiro (mediador) (UNCITRAL, 2018,

article 1.3), é compatível com o proveito econômico estimado pela atividade negocial. A solução do litígio é lograda através da própria autonomia compositiva das partes, contrapondo se à solução oferecida por uma predefinição normativa (MOSCHEN, 2021, p. 73).

Um dos pilares desse meio autocompositivo é, justamente, o reconhecimento da liberdade das partes como constituintes do poder de decisão, através do estímulo à participação no processo construtivo. Essa pacificação lograda pelas partes, portanto, é determinante para a efetividade do acordo produzido em face dos interesses privados, permitindo uma compatibilização de interesses através da cooperação. Desse modo, a mediação tem por objetivo favorecer a continuidade dos vínculos e a construção de relações comerciais mais consistentes e duradouras, consolidando-se como uma ferramenta voltada ao alcance de uma tutela justa e efetiva.

Por ser um método que incentiva o processo de negociações, facilitando a comunicação e impulsionando soluções criativas para a controvérsia, comumente o índice de implementação das obrigações convencionadas é alto. Isso porque, com base em uma percepção macro dos meandros da contenda, favorecida pelo auxílio e técnica do mediador, as partes têm um potencial maior para encontrar respostas congruentes e que melhor atendam aos seus interesses.

No entanto, não se pode perder de vista o fato de que em se tratando de re-

lações comerciais internacionais, complexas por sua natureza, podem pairar incertezas acerca do cumprimento, ou não, do que fora acertado entre as partes. Os acordos de mediação, frente à estrutura dos sistemas jurídicos nacionais pautados no princípio da soberania, encontram desafios concernentes à sua execução transfronteiriça (MOSCHEN, 2021, p. 68).

Sob essa perspectiva, problemas relacionados à eficiência podem operar como obstáculos à escolha pela via autocompositiva (SCHNABEL, 2019, p. 274). Subestimada diante da insegurança jurídica decorrente da ausência de uma estrutura uniforme voltada a conferir efeito aos acordos, a mediação, em comparação à arbitragem, acabou não sendo tão difundida no cenário internacional.

É diante desse panorama que a Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL) preparou um tratado multilateral, a Convenção das Nações Unidas sobre Acordos Internacionais Resultantes de Mediação (Convenção de Singapura), que tem por escopo, como o próprio nome sugere, os acordos de mediação que se refiram a disputas comerciais internacionais. Esse tratado é uma expressão da ruptura do paradigma da judicialização de conflitos (MOSCHEN, 2021, p. 74), uma vez que promove a mediação como alternativa e método efetivo para resolver disputas comerciais permeadas por elementos de estrangeira.

A Convenção de Singapura, uma convenção processual, destina-se a promover as relações comerciais internacio-

nais através da propositura de um regime de reconhecimento e execução de acordos internacionais oriundos da mediação. O seu princípio basilar é a cooperação jurídica transnacional, tendo em vista que atua com o propósito de remover obstáculos ao comércio exterior, preenchendo as lacunas existentes no fomento da mediação (MOSCHEN. 2021, p. 71).

Sendo assim, a importância do tratado consiste em propiciar a conversão do que seria considerado um ato contratual puramente privado em um instrumento que tem a capacidade de circular sob um regime internacional juridicamente vinculativo.

Não há dúvidas de que esse símbolo de segurança promove um cenário mais propício à consolidação da autocomposição no âmbito do comércio internacional. Nessa perspectiva, o Brasil ser signatário da Convenção de Singapura demonstra o reconhecimento da importância da mediação não só no âmbito doméstico, mas especialmente no contexto transnacional.

Entretanto, em que pese a assinatura, o tratado ainda não foi ratificado pelo país. O texto da Convenção, encaminhado para apreciação do Congresso Nacional em agosto deste ano, segue aguardando a designação de relator na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN). Para todos os efeitos, a prova de que o Brasil está, de fato, vinculado ao tratado e de que ele é executório no território nacional, é dependente do ato de ratificação em si.

Assim que ratificada, os beneficiários poderão recorrer ao Poder Judiciário

para exigir o cumprimento de um acordo firmado em sede de mediação comercial internacional, tornando-o, portanto, vinculante e exequível no país. A questão da implementação do tratado, portanto, é de vital importância. Isso porque revestir os acordos mediados de natureza de títulos executivos tem por objetivo a consolidação do método autocompositivo, com a finalidade última de promover a elaboração de acordos duráveis, salvaguardar as boas relações comerciais e evitar o acirramento de potencial litigiosidade.

Desse modo, consoante à complexidade das relações comerciais transnacionais, em especial àquelas que têm como base o contrato de transporte marítimo de mercadorias, constata-se a necessidade de conferir aplicabilidade à mediação na resolução de eventuais litígios. Sob esse viés, a ratificação da Convenção de Singapura pelo Brasil tem a capacidade de dissipar as preocupações acerca da inexecutibilidade dos pactos logrados no âmbito da relação comercial, garantindo-se segurança jurídica e cumprimento às obrigações pactuadas, em benefício das empresas do ramo que operem no país.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MARTINS, Eliane M. Octaviano, "Exploração de Navios no Transporte Marítimo Internacional de Mercadorias", In: *Jornadas de Lisboa de Direito Marítimo*, vol. 2., 2010, Lisboa, Almedina, 2012, pp. 137-161.

MOSCHEN RAIZER BORGES, Valesca, "A Mediação Comercial Internacional na Pauta da Harmonização Processual Ci-

: a Convenção de Singapura, *Revista Vox*, vol. 13, 2018, pp. 68-96, 2021.

SCHNABEL, Timothy, "Implementation of The Singapore Convention: Federalism, Self Execution, and Private Law Treaties", January 22, 2019.

Disponível em:

<https://ssrn.com/abstract=3320823>.

Acesso em: 30 out. 2022.

UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW (UNCITRAL. Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, 2018 (amending the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation, 2002). Disponível em:

[https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/en/annex\\_ii](https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/en/annex_ii). Acesso em: 20 out. 2022.

UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. Covid-19 and Maritime Transport: navigating the crisis and lessons learned. Geneva, 2022.

Disponível em:

<https://unctad.org/webflyer/covid-19-and-maritime-transport-navigating-crisis-and-lessons-learned>.

Acesso em: 28 out. 2022.

JÓVENES INVESTIGADORES/AS  
POSTER  
2022



Amanda Zaqui Milagre, Brasil, Universidade Federal do Espírito Santo  
A Convenção de Singapura sobre Acordos em Mediação Aplicada aos  
Contratos de Transporte Marítimo Internacional de Mercadorias e o  
Cenário Brasileiro



Categoria A

**Perfil da Autora**

Estudante do quinto período do curso de Direito na Universidade Federal do Espírito Santo - UFES/BRASIL. Pesquisadora acadêmica do Labirinto da Codificação do Direito Processual Internacional (LABCODEX). Pesquisadora Bolsista do Programa Institucional de Iniciação Científica da UFES (PIIC), com bolsa FAPES 2022/2023 ICT, em mediação comercial internacional. Monitora da disciplina de Direito Internacional Privado na UFES.

**Coordenadora**

Subcoordenador/a: **Profa. Dra. Valesca Raizer Borges Moschen**.  
Projeto de investigação institucional: **Caleidoscópio do Processo Civil Internacional**.

**Marco Teórico**

Como marco teórico de investigação utilizo as referências e a linha de pesquisa de Timothy Schmalz, ex-chefe de delegação dos EUA no Grupo de Trabalho II da UNCITRAL, a respeito da implementação da Convenção de Singapura. Schmalz demonstra a necessidade de ratificação do tratado pelos países signatários, uma vez que essa vinculação tem o propósito de preencher as lacunas existentes no formato da mediação, removendo, por consequência, os obstáculos ao comércio exterior.

**Hipótese do Trabalho**

- Analisar a viabilidade da escolha da mediação como método adequado de resolução de conflitos em contratos de transporte marítimo internacional de mercadorias, face aos impactos causados nessas relações contratuais em razão da instabilidade do sistema marítimo internacional em decorrência da crise vivenciada nos últimos anos.
- Caracterizar o papel da Convenção de Singapura na promoção e no fortalecimento da mediação como um método eficaz na resolução de disputas comerciais internacionais. Nessa mesma linha, propõe-se o estudo do impacto eventual da Convenção de Singapura sobre os acordos de mediação em matéria de transporte marítimo no Brasil, a fim de reafirmar a imprescindibilidade da ratificação do tratado e, consequentemente, da sua incorporação no ordenamento jurídico brasileiro.

A globalização é responsável pelo desenvolvimento do mercado marítimo, com a intensificação da distribuição de bens envolvendo diferentes agentes econômicos. O transporte transfronteiriço de cargas por via marítima ocupa posição de relevo frente ao comércio exterior, sendo fundamental para garantir o intercâmbio comercial e, por conseguinte, atender à demanda do mercado global. Nesse contexto, assume destaque o contrato de transporte marítimo internacional de mercadorias, que consiste na obrigação assumida pelo carregador de transportar certa quantidade de carga, que lhe foi entregue pelo embarcador, de um porto a outro, e entregá-las a um destinatário. Sob essa perspectiva, a perfeita conclusão do pacto comercial internacional é dependente da operação do transporte marítimo, que constitui um recurso essencial no que diz respeito à fixação do preço final dos produtos e ao atendimento das condições acordadas no negócio celebrado.

**Metodologia da Pesquisa**

A metodologia empregada, a fim de que os objetivos delineados sejam alcançados, trata-se de estratégia de pesquisa qualitativa, baseada em levantamento de base teórica do conteúdo da bibliografia existente sobre a temática bem como de documentos publicados por instituições como a UNCTAD e a UNCITRAL.

**Bibliografia**

BRASIL. Decreto nº 10.741, de 10 de maio de 2020. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2020/Decreto/n10741.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/n10741.htm). Acesso em: 10 maio 2022.  
BRASIL. Decreto nº 10.741, de 10 de maio de 2020. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2020/Decreto/n10741.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/n10741.htm). Acesso em: 10 maio 2022.  
BRASIL. Decreto nº 10.741, de 10 de maio de 2020. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2020/Decreto/n10741.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/n10741.htm). Acesso em: 10 maio 2022.  
BRASIL. Decreto nº 10.741, de 10 de maio de 2020. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2019-2022/2020/Decreto/n10741.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/n10741.htm). Acesso em: 10 maio 2022.



A crise sofrida pela economia global, em decorrência do período pandêmico e pós-pandêmico, perturbou as cadeias de abastecimento marítimo em todo o mundo. Por essas, e outras razões, atender às necessidades das demandas transfronteiriças em matéria contratual de direito marítimo pode configurar como um desafio à ordem jurídica internacional. Tendo em vista que os Estados dispõem de normas específicas acerca do objeto da controvérsia, observa-se que a jurisdição estatal não se afigura como o local mais apropriado à resolução de um conflito no âmbito do comércio exterior. Destarte, surge a autocomposição como uma alternativa, visto que tal processo permite que as disputas, antes litigadas perante o Estado, possam ser sanadas por meio dos métodos adequados de resolução de conflitos.

**Resultados / Reflexões**

- O emprego da mediação, como método de resolução de conflitos aplicado aos litígios que decorrem de relação contratual firmada em sede de transporte marítimo de mercadorias, justifica-se em razão da necessidade de construção de vínculos mais duradouros, que favoreçam a continuidade da parceria comercial entre as partes, face porque esse meio autossusscitativo incentiva o processo de negociações, facilitando a comunicação e impulsionando soluções criativas para a controvérsia, o que configura como uma boa estratégia de gestão de crise.
- A importância da ratificação da Convenção de Singapura pelo Brasil fica evidente em face da necessidade de conferir segurança e estabilidade às partes que optam pela mediação para solucionar litígios em matéria comercial internacional. Nesse sentido, consoante à complexidade das relações comerciais transnacionais, evita-se a criação de instrumentos de harmonização codifica com a finalidade de promoção da cooperação jurídica internacional. Assim, a finalidade do que se propõe consiste em viabilizar o acesso à justiça e a solução eficiente dos litígios.

● Imagem do Google



## **CATEGORÍA B**

**Maestrandos  
(hasta 30 años)**

# Tribunal de Justiça da Comunidade Andina de Nações e o Direito do Consumidor Aéreo: um olhar à luz do Direito Internacional Privado

**Ida Geovanna MEDEIROS da COSTA**  
**Lívia dos ANJOS BARROS**

Universidade de Brasília (Brasil)

Directora: Lopes, Inéz

Palavras chaves: Tribunal de Justiça, Comunidade Andina de Nações, integração regional, aviação civil, consumidor

## Resumo

Simón Bolívar, quando conclamou a América do Sul à unidade política e territorial, em 1826, idealizava a supressão das fronteiras traçadas pelas metrópoles europeias. Uma decorrência desse ideal, seria a liberdade de trânsito e fixação dos cidadãos (MENDES, 2016), o que também é corroborado por meio dos serviços de transporte aéreo que possibilitam a aproximação das pessoas, a flexibilização das fronteiras e a livre circulação de mercadorias.

Um reflexo disso, segundo a Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), é que mais de quatro bilhões de passageiros voaram entre 2018 e 2019 pelo mundo e o número de consumido-

res de serviços de transporte aéreo mais do que dobrou – passando de 1,6 bilhão em 2000 para 4,5 bilhões de passageiros em 2019, ou seja, menos de duas décadas (LOPES, 2021). O dado revela o impacto e importância da atividade de transporte aéreo para a circulação regional de pessoas.

Tendo isto em vista, a presente pesquisa explorou a relação entre integração regional pela Comunidade Andina de Nações (CAN) e o Direito Internacional Privado do Consumidor no Transporte Aéreo Internacional, por meio de estudos do Direito Comunitário Andino, onde também se revela o próprio DIPr. A metodologia utilizada neste trabalho prosseguiu por intermédio de revisão bibliográfica e documental, bem como jurisprudência em matéria de consumo do Tribunal de Justiça da Comunidade Andina (TJCA), portanto, examinou influências dessas decisões do Tribunal

Andino no desenvolvimento da integração regional latino-americana. Nesse passo, é evidente a estreita relação entre a integração regional e a aviação civil, em especial, no que tange a proteção do consumidor. Isto porque, as diferenças nacionais da regulamentação nas relações de consumo tornam-se um problema que obstaculiza, tanto a integração econômica, como também a proteção do indivíduo que se move transnacionalmente, daí a relevância de uma harmonização.

Em outras palavras, a existência de regulamentação sobre a norma aplicável às relações de consumo de transporte aéreo pode também influenciar no processo de integração econômico-regional. Em virtude disso, quanto mais profundo for o processo de integração, mais imperiosa é a criação de instrumentos harmonizadores que ofereçam proteção ao sujeito vulnerável da relação de consumo internacional.

Apesar de os Estados serem os principais atores na sociedade internacional e detentores de poderes soberanos nas tomadas de decisão, as Organizações Internacionais ou Intergovernamentais (OIs) gozam de personalidade jurídica internacional e contribuem ativamente para a condução de políticas públicas internacionais, mesmo que sujeitas secundárias com poderes limitados nas atribuições estabelecidas em seus tratados constitutivos (LOPES; MOSCHEN, 2020). Desse modo, a atuação do bloco de integração regional será responsável por promover políticas públicas internacionais que contribuam para a cooperação na harmonização jurídica.

Na América, há diversos processos de integração regional fruto do trabalho da Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL), visando apontar uma solução para os Estados, quanto aos problemas advindos do processo de substituição de importações na região, o que explica o porquê de ter havido tentativas de integração econômica com o Tratado de Montevideu de 1960, que criou a Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), projeto substituído em 1980 pela Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) (KLEIN, 2019).

No entanto, o processo de integração regional ocorrido em 26 de maio de 1969, com a assinatura do Acordo de Integração Sub-regional Andino (Acordo de Cartagena) foi a virada de chave para o que se estabeleceu como hoje é conhecida como a Comunidade Andina de Nações (CAN), bloco econômico inicialmente formado por Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Chile. Atualmente, a CAN é constituída por Colômbia, Equador, Peru e Bolívia – sendo que esta última está em processo de adesão ao Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) (KLEIN, 2019).

Em que pese o único bloco econômico, no mundo, genuinamente supranacional, ser a União Europeia (UE), o processo de integração andino é um dos mais avançados da América Latina e possui algumas características de supranacionalidade com o objetivo de formação gradual de um mercado comum latino-americano, mesmo que tenha consolidado apenas uma zona de livre comércio entre os Estados Membros (KLEIN, 2019).

Nesse sentido, a atuação do TJCA mostrou-se exemplar para análise da integração regional latino-americana. A atividade de reenvio prejudicial do bloco, segundo Oliveira (2019), é a pedra angular dos sistemas internormativos, pois viabiliza a cooperação jurídica internacional entre juízes dos tribunais dos Estados e os juízes da integração em prol da interpretação e aplicação correta e homogênea das normas e, assim, promove a própria construção do direito da integração regional.

No caso da aviação civil regional, por exemplo, se de um lado, no âmbito do MERCOSUL, inexistente regulamentação sobre a norma aplicável às relações de consumo ou relacionada aos limites de transporte aéreo, aplicando-se apenas as normas nacionais e a Convenção de Montreal para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, de 1999 (LOPES, 2021); de outro, o bloco andino promoveu a Decisão N° 619/2005, consistente em normas para a harmonização dos direitos e obrigações dos usuários de transporte aéreo na Comunidade Andina.

Em sua decorrência – constando ao todo, apenas três Interpretações Prejudiciais em matéria de consumo no banco de jurisprudência do TJCA – como uma delas, sobreveio a Interpretación Prejudicial N° 313-IP-2015, de 26 de Junho de 2017, a qual debateu obrigações dos usuários, transportadores, operadores de serviços de transporte aéreo na Comunidade. peração na harmonização jurídica.

A interpretação prejudicial entendeu que a Decisão N° 619 tem a finalidade

de desenvolver ações para fortalecer a infraestrutura e os serviços necessários na área de transportes, porque é necessária a harmonização das exigências em matéria de proteção dos usuários que estão sujeitos na região dos prestadores de serviço de transportes aéreo, através do estabelecimento de um marco jurídico comum e estável, que promove a livre prestação dos serviços de transporte aéreo para a mobilização de pessoas e o intercâmbio de bens e serviços.

Ademais, a interpretação impõe que a normativa sub-regional goze de prevalência em relação aos ordenamentos jurídicos dos países membros e as normas de Direito Internacional. No entanto, é muito importante ter em conta que em virtude do Princípio da Complementaridade, a norma nacional poderia regular temas que não se encontram abordados pela norma comunitária andina, com o objetivo de lograr uma correta aplicação desta última. Desta forma, a norma comunitária pode ser complementada pela nacional.

A relação percebida entre a integração regional e o direito internacional privado do consumidor diz respeito à tentativa de reforçar as definições jurídicas de circunstâncias imprevistas, força maior, caso fortuito e equipamento dos usuários. A definição jurídica pelo órgão comunitário contribui para diminuição de ruídos na resolução de conflitos locais. Além disso, a interpretação não obsta oportunidade das legislações nacionais atribuírem maiores direitos. Assim também, ela é discreta quanto à ideia de proteção do vulnerável, de modo a conduzir de forma mínima as garantias do consumidor internacional.

Nesse sentido, a análise da decisão confirma a ideia já defendida pela bibliografia de que o sucesso de uma integração regional reside na sua capacidade de adaptação aos mecanismos de harmonização jurídica desenvolvidos no âmbito de um sistema internormativo. É pela aproximação jurídica que a integração se apoia para estabelecer as melhores estratégias de proteção ao indivíduo (OLIVEIRA, 2019).

Nas últimas décadas, os processos de integração regional que constituíram a CAN, obtiveram avanços em alguns setores e retrocessos em outros. Permanecem, ainda, algumas questões políticas, sociais e jurídicas a serem avançadas. A articulação entre Estados-Partes da CAN e seus Estados Associados, gera consequências, mesmo que nem sempre na velocidade e no sentido planejados (OLIVEIRA).

Portanto, é importante estabelecer definições jurídicas no âmbito do direito comunitário, nesse caso, o conceito de consumidor, para determinar de maneira clara quem está coberto pelas normas protetoras, pois o estabelecimento de políticas para a defesa do consumidor é indissociável dos processos de integração regional que possuem objetivos econômicos. As regras que são estabelecidas em termos de tutela à parte mais fraca da relação de consumo terão grande impacto no estabelecimento dos parâmetros e exigências no desempenho dos forme-cedores que direcionam suas atividades comerciais para esses âmbitos, que é objetivo da integração regional. Destaca-se também o papel dos Estados-Membros na colaboração da harmonização jurídica, incorporando

e cedendo aspectos do sistema nacional ao bloco Andino.

A presente pesquisa, nesse aspecto, interessa ao escopo da ASADIP, dado que esta estimula a confiança e o fortalecimento da Cooperação Jurídica Internacional entre os países, atuando juntamente às Organizações Internacionais como o MERCOSUL (LOPES, 2020). A CAN, como o bloco latino mais antigo, além de ter inspirado o próprio bloco mercosurenho, em que pese os desafios presentes nos conflitos inerentes aos limites de jurisdição, no que diz respeito à sua integração regional em matéria de consumo aéreo por meio do TJCA, por mais que ainda tenha o que evoluir em termos de harmonização e estabelecimento de um marco jurídico comum e estável para além da Convenção de Montreal de 1999, da Decisão N° 619/2005 e da própria Interpretación Prejudicial N° 313-IP-2015, tais decisões sobre direitos e obrigações dos usuários no transporte aéreo internacional, a pedido de tribunais nacionais, enseja um traço importante para se alcançar a supranacionalidade, uma Cooperação Jurídica Internacional evoluída e já possui algo positivo a ensinar.

## BIBLIOGRAFIA

KLEIN, Luciane, "A qualificação do consumidor nos processos de integração regional", *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Uberlândia (UFU)*, 2019, v.47, n. 1, pp. 7- 38,

LOPES, Inez, O Direito Internacional Privado e a proteção do consumidor em serviços de transporte aéreo. Dizer o Di-

reito: o papel dos tribunais no século XXI", *Atas do VII Congresso Internacional Direito na Lusofonia*, UMinho Editora, 2021, pp. 101-108.

LOPES, Inez / MOSCHEN RAIZER BORGES, Valesca, "Os papéis da OEA e da ASADIP para a formação de uma Cultura 'Glocal' em Direito Internacional Privado na América Latina", In: *Desafios do direito internacional privado na sociedade contemporânea*, vol. 1, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2020, pp. 319-349.

MENDES, José Sacchetta, "¿PUERTAS ABIERTAS? migrações regionais, direito e integração na Comunidade Andina de Nações e no Mercosul. Caderno CHR, Salvador, V. 29, N. SPF 03, p. 77-92, 2016.

OLIVEIRA, Francielle Vieira. "Integração regional e harmonização jurídica: estudo sobre as dinâmicas jurisdicionais nos sistemas normativos da União Europeia, da Comunidade Andina de Nações e do Mercado Comum do Sul". *Tese de Doutorado em Ciências Jurídicas (Especialidade em Ciências Jurídicas Públicas)*, Universidade do Minho - Escola de Direito, 2019.

JÓVENES INVESTIGADORES/AS  
2022  
POSTER

Anjos, Livia Cristina dos - Brasil - Universidade de Brasília, UnB.  
Medeiros, Ida Geovanna - Brasil - Universidade de Brasília, UnB.

A Proteção do Consumidor em Serviços Aéreos e o Tribunal de  
Justiça da Comunidade Andina de Nações (TJCA)



CATEGORIA B

PERFIL DAS AUTORAS

**Livia Cristina dos Anjos:** Mestranda em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília (PPGD-UnB).  
**Ida Geovanna Medeiros:** Mestranda em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília (PPGD-UnB).

COORDENADORA

**Inez Lopes:** Professora Associada da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB). Coordenadora do Grupo de Estudos em Direito Internacional Privado, do Comércio Internacional e Direitos Humanos - GDIP (CNPq), nas linhas de pesquisa GDIP-TRANSJUS e GDIP-AÉREO-ESPACIAL.

MARCO TEÓRICO

A presente pesquisa explorou a relação entre integração regional pela CAN e o Direito Internacional Privado do Consumidor, por meio dos estudos sobre o Direito Comunitário Andino, onde também se revela o próprio DIPr. Nesse passo, tem-se como base teórica: o artigo de **José Sachetta Mendes (2016)** que explica que Simón Bolívar, quando conclamou a América do Sul à unidade política e territorial, em 1826, idealizava a supressão das fronteiras traçadas pelas metrópoles europeias. Uma decorrência desse ideal, seria a liberdade de trânsito e fixação dos cidadãos, o que é corroborado por meio dos serviços de transporte aéreo. Em seguida, o artigo de **Inez Lopes e Valesca Moschen (2020)** afirma que apesar de os Estados serem os principais atores na sociedade internacional e detentores de poderes soberanos nas tomadas de decisão, as OIs gozam de personalidade jurídica internacional e contribuem ativamente para a condução de políticas públicas internacionais, mesmo que sujeitas secundárias com poderes limitados nas atribuições estabelecidas em seus tratados constitucionais. Para mais, utiliza-se o artigo de **Luciane Klein (2019)**, onde se fala que o processo de integração regional ocorreu em 26 de maio de 1969, com assinatura do Acordo de Cartagena, foi a virada de chave para o que se estabeleceu hoje como é conhecida como Comunidade Andina de Nações (CAN), bloco econômico formado por Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. O artigo de **Inez Lopes (2021)** aponta que segundo a OACI, mais de 4 bilhões de passageiros voaram entre 2018 e 2019 pelo mundo e o número de consumidores de serviços de transporte aéreo mais do que dobrou em apenas duas décadas. Em seguida, a tese de Doutorado de **Francielle Oliveira (2019)** demonstra que a atuação do TJCA mostrou-se exemplar para análise da integração regional latino-americana e que a atividade de reenvio prejudicial do bloco é a pedra angular dos sistemas internormativos, pois viabiliza a Cooperação Jurídica Internacional entre juizes dos Estados e os Juizes da Integração em prol da interpretação correta e homogênea das normas, promovendo a construção do direito da integração regional. Portanto, a pesquisa conta com relevante acervo bibliográfico, bem como jurisprudência do TJCA sobre o tema.

CONTEXTO

- O número de consumidores de serviços de transporte aéreo passou de 1,6 bilhão em 2000 para 4,5 bilhões de passageiros em 2019;
- O dado revela o impacto e importância da atividade de transporte aéreo para a circulação regional de pessoas.

PROBLEMA DE PESQUISA

A presente pesquisa explora a seguinte problemática: **Qual a relação entre integração regional pelo Tribunal de Justiça da Comunidade Andina de Nações (TJCA) com o Direito Internacional Privado do Consumidor no Transporte Aéreo?**

ANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO PREJUDICIAL Nº 313-IP-2015

A **Interpretación Prejudicial Nº 313-IP-2015** debateu obrigações dos usuários, transportadores, operadores de serviços de transporte na aérea na CAN.

- A interpretação impõe que a normativa sub-regional goze de prevalência em relação aos ordenamentos jurídicos dos países membros e as normas de Direito Internacional. A norma comunitária pode ser complementada pela nacional;
- Entendeu que a Decisão Nº 619/2005 da CAN tem finalidade de desenvolver ações para fortalecer a infraestrutura e os serviços necessários na área de transportes, porque é necessária a harmonização das exigências em matéria de proteção dos usuários que estão sujeitos na região dos prestadores de serviço de transporte aéreo, através do estabelecimento de um marco jurídico comum e estável, que promove a livre prestação desses serviços para mobilização de pessoas, bens e serviços.



HIPÓTESE DE PESQUISA

É evidente a estreita relação entre a integração regional e a aviação civil internacional no que tange a proteção do consumidor. Isto porque, as diferenças nacionais da regulamentação nas relações de consumo tornam-se um problema que obstaculiza, tanto a integração econômica, como a proteção do indivíduo que se move transnacionalmente, daí a relevância de uma harmonização. A existência de regulamentação sobre a norma aplicável às relações de consumo no transporte aéreo internacional pode influenciar no processo de integração econômico-regional e quanto mais profundo for o processo de integração, mais imperiosa é a criação de instrumentos harmonizadores que ofereçam proteção ao sujeito vulnerável da relação de consumo internacional. Portanto, o sucesso de uma integração regional reside na capacidade de adaptação aos mecanismos de harmonização jurídica desenvolvidos no âmbito de um sistema internormativo. É pela aproximação jurídica que a integração se apoia para estabelecer as melhores estratégias de proteção ao indivíduo em uma economia cada vez mais globalizada.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste trabalho prosseguiu por intermédio de revisão bibliográfica e documental, bem como análise de jurisprudência em matéria de consumo aéreo do Tribunal de Justiça da Comunidade Andina (TJCA), por meio da Interpretación Prejudicial Nº 313-IP-2015 à luz da Decisão Nº 619/2005 da CAN, portanto, examinou as influências da decisão no desenvolvimento da integração regional latino-americana.

BIBLIOGRAFIA

- ANDINO, Tribunal. **Interpretación Prejudicial Nº 313-IP-2015**. Disponível em : [https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/jurisprudencia/clasificacion\\_tematica/protector\\_consumidor/](https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/jurisprudencia/clasificacion_tematica/protector_consumidor/). Acesso em: 12 de Out. de 2022.
- KLEIN, Luciane. **A qualificação do consumidor nos processos de integração regional**. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Uberlândia (UFU), v. 47, n. 1, p. 7-38, jan./jun. 2019.
- LOPES, Inez. **O Direito Internacional Privado e a proteção do consumidor em serviços de transporte aéreo**. Dizer o Direito: o papel dos tribunais no século XXI. Atas do VII Congresso Internacional "Direito da Lusofonia", Umiho Editora, p. 101-108, Ed.: 30, 2021.
- LOPES, Inez. MOSCHEN, Valesca Raizer Borges. **Os papéis da OEA e da ASADIP para a formação de uma Cultura "Glocal" em Direito Internacional Privado na América Latina**. Desafios do direito internacional privado na sociedade contemporânea, 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, v. 1, p. 319-349, 2020.
- MENDES, José Sachetta. **¡PUERTAS ABIERTAS? migraciones regionales, derecho e integración na Comunidade Andina de Nações e no Mercosul**. Caderno CHR, Salvador, V. 29, N. SPF 03, p. 77-92, 2016.
- OLIVEIRA, Francielle Vieira. **Integração regional e harmonização jurídica: estudo sobre as dinâmicas jurisdicionais nos sistemas normativos da União Europeia, da Comunidade Andina de Nações e do Mercado Comum do Sul**. Universidade do Minho - Escola de Direito, Tese de Doutoramento em Ciências Jurídicas (Especialidade em Ciências Jurídicas Públicas), 2019.

REFLEXÕES

A ASADIP estimula o fortalecimento da Cooperação Jurídica Internacional entre os países, atuando juntamente às OIs como o MERCOSUL. A CAN, como bloco latino mais antigo, além de ter inspirado o próprio bloco mercosureño, por mais que ainda tenha o que evoluir em termos de harmonização e estabelecimento de um marco jurídico comum e estável para além da Convenção de Montreal de 1999, da Decisão Nº 619/2005 e da própria Interpretación Prejudicial Nº 313-IP-2015, tais decisões sobre direito e obrigações dos usuários no transporte aéreo internacional a pedido de tribunais nacionais, ensaja um traço importante para se alcançar a supranacionalidade, uma Cooperação Jurídica Internacional evoluída e já possui algo positivo a ensinar.





## **CATEGORÍA D**

**Jóvenes docentes e investigadores/as  
(hasta 40 años)**

# ODR como meio adequado de solução de conflitos de consumo no MERCOSUL

**Gisele HOLANDA PRESCHOLDT**

Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil)

Diretora: Raizer Borges, Valesca

Palavras chaves: MERCOSUL, conflitos transnacionais, consumidor, solução adequada, *Online dispute resolution* (ODR)

## Resumo

Os litígios transnacionais de consumo têm algumas características que tornam especialmente difíceis a reparação dos danos experimentados pelo consumidor. Quanto à realidade fática, o consumidor que busca a aquisição de um produto ou serviço fora de seu domicílio nacional (ou com algum outro elemento de estraneidade) se depara com diversas circunstâncias que se agregam como potenciais complicadores ao contrato a ser concretizado. O idioma, a distância entre as partes envolvidas na relação de consumo, diferenças culturais, além da própria vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor são fatores que podem incidir nesses contratos, aumentando os embaraços na resolução de problemas que por ventura venham a ser por este experimentados.

Somam-se a esse cenário características inerentes ao exercício da jurisdição internacional que contribuem a esse potencial imbróglia: a escolha da jurisdição e da lei aplicável, o longo iter na obtenção de uma resposta para a solução do litígio e, em seguida, as incertezas e entraves em executar a decisão por ventura obtida. Tudo isso em um contexto em que os altos custos que envolvem um litígio internacional devem ser considerados.

Vislumbra-se, desse modo, que a realização do Direito, considerada sob a ótica do acesso à Justiça, demanda respostas que nem sempre são satisfatoriamente dadas pelas ferramentas tradicionalmente disponibilizadas pela ciência jurídica.

Desse modo, “a consubstanciação dos movimentos de desjudicialização, desnacionalização do direito e da emancipação das partes trouxe para a harmonização do direito internacional a inevitabilidade de se compreender o

acesso à justiça para fora do Poder Judiciário, ou seja, um acesso extramuros, governado não por uma predefinição normativa, mas pela própria pacificação lograda através da autonomia auto-compositiva das partes com o auxílio de um mediador” (MOSCHEN e OLIVAR JIMENEZ, 2021, p. 10).

Esse movimento, no entanto, além das dificuldades e das críticas existentes à adoção dos meios alternativos de solução de conflitos, encontra também na própria concepção original do MERCOSUL a insuficiência de mecanismos de solução de co-trovérsias que atendam diretamente às populações abrangidas pelo bloco econômico, sobretudo em litígios de escassa quantia. Como nos lembram KLEIN e ARRUDA (2018, p. 295), o sistema de solução de controvérsias mercosulino é voltado para a negociação, mediação e arbitragem entre os Estados Partes, “(...) inexistindo um tribunal com jurisdição obrigatória ou acessível aos particulares”, havendo, segundo as autoras, relação direta entre o nível de integração econômica e o processo de solução de conflitos, sendo um tanto mais desenvolvido quanto o for o outro.

Nesse contexto, dadas as peculiaridades do bloco sul-americano, surge como problema principal a nortear a pesquisa ora proposta: como oferecer mecanismos ágeis, menos custosos e mais acessíveis à resolução de controvérsias de consumo eletrônico transnacional no âmbito do MERCOSUL?

Como hipótese, deduzimos que o in-

ventivo à adoção de ODR (online dispute resolution) poderia auxiliar na resolução de controvérsias consumeristas no âmbito do MERCOSUL, bem como aumentar os níveis de proteção ao consumidor e incentivo ao comércio eletrônico no bloco estando amparado nos princípios que prezam pelo acesso à justiça.

O ponto de partida das investigações funda-se nas Diretrizes das Nações Unidas para a Proteção do Consumidor, atualizadas em 2015, ao estabelecerem que (i) sejam assegurados, aos consumidores eletrônicos, níveis de proteção não inferiores àqueles assegurados nas demais formas de comércio e (ii) que os Estados estimulem o desenvolvimento de mecanismos transparentes, ágeis, imparciais, acessíveis e de baixo custo para lidar com reclamações de consumidores, inclusive para casos transfronteiriços. Essas diretrizes impactaram a Resolução MERCOSUL GMC n° 37/2019, a qual estabelece, em seu art. 8°, que “os Estados Partes propiciarão que os fornecedores adotem mecanismos de resolução de controvérsias online ágeis, justos, transparentes, acessíveis e de baixo custo, a fim de que os consumidores possam obter satisfação às suas reclamações”.

A pesquisa considerou também a experiência brasileira com a plataforma “Consumidor.gov.br”, que conta com quase 80% de casos solucionados, utilizando apenas a negociação direta entre as partes. Além disso, a experiência argentina na oferta de mediação em matéria de consumo, a partir de uma plataforma eletrônica (VUF - Ventanilla

Única Federal), também traz importantes contribuições. Nossa proposta é a junção dessas duas iniciativas, a fim de oferecer aos cidadãos residentes no MERCOSUL um ambiente online de resolução de conflitos de consumo, adotando-se, como paradigma, a Lei Modelo da UNCITRAL sobre ODR.

Caso a fase de negociação direta termine sem acordo entre as partes, o consumidor seria encaminhado, na própria plataforma, a um serviço de mediação por profissionais cadastrados no serviço de proteção de consumo de cada estado parte.

A adesão das empresas seria voluntária, sendo motivada pela visibilidade que as reclamações possuem, melhorando ou piorando a reputação dos fornecedores, a depender de como conduzem as reclamações que lhes são dirigidas. O sucesso dessa iniciativa é passível de ser vista diante da experiência, no Brasil, com a plataforma Consumidor.gov.br.

Para uma fase posterior, propõe-se o desenvolvimento de ferramenta de mediação automatizada, sem a intervenção humana e com o possível envio dos casos não solucionados aos respectivos judiciários nacionais, mediante a prévia anuência das partes. Inclusive, já existe projeto-piloto, no Brasil, integrando o Consumidor.gov.br a dois Tribunais: o Tribunal Regional Federal da 1a. Região e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Colin Rule e Amy Schmitz defendem ser essencial estabelecer as bases para um sistema ODR em toda a Internet "(...) que possa agilizar o comércio eletrônico

global, gerando resultados vantajosos para empresas e consumidores. Este novo sistema deve incorporar gerenciamento de reputação, trans-parência e software de resolução de ponta para nivelar esse campo e restaurar a confiança do consumidor. Será um grande passo à frente na construção de um novo sistema de justiça - construído sob medida para a Internet e capaz de fornecer resoluções rápidas e justas a qualquer consumidor, independentemente da jurisdição legal em que resida". (Schmitz, Amy J.; Rule, Colin, 2017, p. 17).

As ODR, assim, se mostram aptas a favorecer a resolução de disputas de consumo transnacionais, sobretudo aquelas realizadas em linha; reduzindo demandas judiciais nos Estados-Partes, favorecendo o aumento da confiança dos consumidores regionais e fortalecimento do comércio transfronteiriço. Além disso, sob a perspectiva dos movimentos de desjudicialização, as ODR possuem o condão de oferecer espectro de reparação a demandas que quiçá não chegariam ao judiciário (demandas de baixo valor e grande volume); resgatar o diálogo entre as partes e a favorecer a cultura do não-litígio, fortalecendo-se a concepção da jurisdição como fenômeno multifacetário e valorizando a possibilidade de a sociedade compor seus conflitos, como regra, em detrimento de meios litigiosos.

## BIBLIOGRAFIA

CORTÉS, P.; LODDER, A. R. "Consumer Dispute Resolution Goes Online: Reflexions on the Evolution of European Law for Out-of-Courts Redress. Maastricht", *Journal of European and*

*Comparative Law*, vol. 21(1), pp. 14-38.

MOSCHEN, V. R. B. / OLIVAR JIMENEZ, M. L., "A proteção do consumidor e a desjudicialização dos conflitos: mediação uma pauta ausente no MERCOSUL?", In: MARQUES, C. L., [et al], *Los 30 años de MERCOSUR: avances, retrocesos y desafíos en materia de protección al consumidor*, 1er edición, Buenos Aires, IJ Editores, 2021 (Libro digital, EPUB).

SCHIMITZ, A. / RULE, C., *The New Handshake - Online Dispute Resolution and the Future of Consumer Protection*, American Bar Association. Edição do Kindle., 2017.

SQUEFF, T. / MUCELIN, G., "Contratos internacionais online de consumo: transformação digital desde o Mercosul", *Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito*, vol. 13(3), 2022, pp. 444-466.

JÓVENES INVESTIGADORES/AS  
2022  
POSTER

Gisele Holanda Prescholdt - Brasil - Universidade Federal do Espírito Santo



## ODR como meio adequado de solução de conflitos de consumo no MERCOSUL



Categoria D

### PERFIL DA AUTORA

Gisele Holanda Prescholdt é mestranda do Programa de Mestrado em Direito Processual da Universidade Federal do Espírito Santo.

### DIRETORA

Valesca Raizer Borges Moschen é Doutora em Direito e Relações Internacionais pela Universidade de Barcelona - UB, Barcelona, Espanha. Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito Processual - UFES, Vitória, ES.

### MARCO TEÓRICO. HIPÓTESE DE TRABALHO

Litígios transnacionais de consumo possuem características que tendem a dificultar a reparação do consumidor. O idioma, a distância entre as partes envolvidas na relação de consumo, diferenças culturais, custos com procedimentos judiciais tradicionais, além da própria vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor são fatores que podem incidir, dificultando a defesa e a reparação do consumidor. Situação essa que tende a se agravar na aquisição de produtos e serviços por meios eletrônicos. Problema que se apresenta: como oferecer mecanismos ágeis, menos custosos e mais acessíveis à resolução de controvérsias de consumo eletrônico transnacional no âmbito do MERCOSUL? Como hipótese, as ODR (Online Dispute Resolution) poderiam se converter em ferramentas aptas ao adequado tratamento desses conflitos em rede, aumentando a proteção de consumidores e ampliando o acesso à justiça.

### DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

- Vantagens das ferramentas de ODR em face dos meios tradicionais de resolução de litígios pelas Cortes;
- Resolução GMC MERCOSUL nº 37/2019;
- Experiência de plataforma governamental brasileira com quase 80% de casos solucionados, utilizando-se negociação direta entre as partes;
- Experiência argentina na mediação em matéria de consumo

### RESULTADOS/REFLEXÕES

- Proposta de plataforma digital para o registro de reclamações transfronteiriças de consumo envolvendo cidadãos de países integrantes do bloco e fornecedores aqui sediados ou em operação.
- Fase 1: negociação direta entre as partes, nos moldes já ofertados pela plataforma brasileira "Consumidor.gov.br".
- Fase 2: Direcionamento do consumidor a um serviço de mediação cadastrado e gerido pelos escritórios de defesa do consumidor mantidos pelos Estados-partes, com aproveitamento das estruturas eventualmente existentes nos Estados-partes para tanto (ex. Argentina).
- Adesão das empresas à plataforma facultativa, mas esperada em virtude das consequências que a visibilidade da reclamação poderia trazer à reputação da empresa.
- Fortalecimento da autocomposição e da conscientização do consumidor.

### METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

A pesquisa utilizou o método hipotético-dedutivo para formular sua hipótese, analisar os dados obtidos e chegar às suas conclusões. Quanto à técnica, recorreu-se à pesquisa bibliográfica e à análise das Diretrizes das Nações Unidas de 2015 para a Defesa do Consumidor, bem como as regras do MERCOSUL e seus Estados Partes sobre resolução de disputas online, além dos Princípios Transjus da ASADIP sobre acesso à justiça, a Lei Modelo da UNCITRAL sobre ODR e as principais regras da União Europeia sobre a temática (Regulamento UE N° 524/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho e Diretiva 2013/11/UE do Parlamento Europeu e do Conselho).

### BIBLIOGRAFIA

- CORTÉS, P.; LODDER, A. R. Consumer Dispute Resolution Goes Online: Reflexions on the Evolution of European Law for Out-of-Courts Redress. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 21(1), 14-38.
- MOSCHEN, V. R. B. e OLIVAR JIMENEZ, M. L., A proteção do consumidor e a desjudicialização dos conflitos: mediação uma pauta ausente no MERCOSUL? In: MARQUES, C. L., [et al], *Los 30 años de MERCOSUR: avances, retrocesos y desafíos en materia de protección al consumidor*. 1er edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: IJ Editores, 2021. Libro digital, EPUB.
- SCHIMITZ, A.; RULE, C. (2018-02-28T22:58:59.000). *The New Handshake - Online Dispute Resolution and the Future of Consumer Protection*. American Bar Association. Edição do Kindle. American Bar Association. Edição do Kindle, 2017.
- SQUEFF, T.; MUCELIN, G. Contratos internacionais online de consumo: transformação digital desde o Mercosul. *Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD)*, 13(3), 444-466. 2022.

# Los desafíos de la ley Aplicable a los *Smart Contract*

**Josefina PEDRAZA**  
**Carlos Marcelo HUERGO**

Universidad Nacional de La Plata (Argentina)

Directora: Consolo, Analía

Palabras claves: *Smart Contract*, nuevas tecnologías, seguridad jurídica, regulación normativa, MERCOSUR

## Introducción

Las formas de celebrar contratos han variado a lo largo del tiempo, en la actualidad, encontramos un nuevo desafío a través de los *Smart Contracts* (contratos inteligentes), que son programas informáticos de “*scripts*” (códigos informáticos) escritos con lenguajes de programación que ejecutan acuerdos establecidos entre dos o más partes.

Podemos encontrar en el marco de la UNCITRAL y la Unión Europea que trata de lograr una regulación armoniosa para la celebración de contratos a través de contratos Inteligentes para los Estados partes.

En la actualidad, a consecuencia de In-

ternet y otros medios de comunicación a cambiado la forma de comercialización de productos y servicios, lo que ha generado interrogantes a la idoneidad de normas que regulan el sistema de contratación para solucionar las problemáticas atinentes a estas nuevas formas. El objetivo de este trabajo es demostrar la necesidad de una legislación específica del MERCOSUR para estas nuevas contrataciones, a los fines de brindar seguridad a los usuarios y otorgar validez legal a las transacciones que se instrumenten por intermedio de *Smart Contracts*.

## Enfoque actual en la celebración de contratos inteligentes

La contratación por medios digitales no implica un nuevo tipo contractual, sino que refiere a una nueva forma de celebrar contratos. Los *Smart Contracts*

garantizan la contratación sin presencia simultánea de las partes y la manifestación del consentimiento se realiza utilizando la tecnología *Blockchain* (conjunto de ordenadores denominados “nodos” que, conectados en red, utilizan un mismo sistema de comunicación con el objetivo de validar y almacenar la misma información registrada en una red de nodos conectados entre sí, denominado peer to peer (Preukschat (2017)). En dicha base de datos distribuida se hallará el contenido de los Smart Contracts, y seguirán siendo electrónicos mientras continúen en la plataforma mencionada.

## Características y tecnología aplicada a los *Smart Contract*

Pueden ser celebrados por personas físicas y/o jurídicas, y también por máquinas (“*machine to machine*”) que funcionan de manera autónoma se perfeccionan y ejecutan entre máquinas directamente” y en virtud de los cuales “los dispositivos se conectan y proceden a perfeccionar nuevos y sucesivos contratos bajo ciertas circunstancias previamente acordadas por las partes involucradas en un contrato legal inteligente”.

La principal característica de los *Smart Contract* es la ejecución automática de los términos del contrato, quedando fuera de la voluntad de las partes el cumplimiento de las condiciones una vez se ha producido la firma de dicho contrato. Son capaces de ejecutarse y hacerse cumplir por sí mismo, de manera autónoma y automática, sin in-

termediarios ni mediadores. Es decir que la propia red de *Blockchain* es la que se encarga de hacer cumplir y ejecutar los acuerdos entre las partes interesadas, facilitando la autoejecutabilidad simplificándoles el cumplimiento de las obligaciones y evitando litigios.

Establecer la ley específica de aplicación es uno de los tantos desafíos que presentan los *Smart Contracts* atento las características propias de él, tales como la autoejecución, desintermediación y previsibilidad, inmutabilidad, seguridad, descentralización y deslocalización.

La tecnología *Blockchain* existe en una red de computadoras con nodos y usuarios basados en todo el mundo por lo que surge el interrogante ¿Cuál es la ley aplicable al *Smart Contract* montado en una red tan distribuida? En general las partes pueden estipular por contrato la ley aplicable a un *Smart Contract*. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, por ejemplo, en Argentina, la ley aplicable elegida por las partes debe tener alguna vinculación con el negocio en cuestión.

## Derecho comparado

En el marco de *The United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), establece una regulación base para que se pueda contar con parámetros uniformes en la integración de una regulación específica para esta modalidad contractual por parte de los estados interesados.

Para los contratos inteligentes, La Ley Modelo de UNCITRAL sobre Contratación Electrónica tiene por finalidad transmitir

a las legislaciones nacionales la necesidad de reconocer un valor a los registros electrónicos, así como a la contratación por medios alternos al papel digital, lo que produjo consecuentemente la publicación de la citada ley como así también la posterior emisión de la Ley Modelo de firmas electrónicas.

El art. 6 y sucesivos establecen las distintas formas por las cuales se pueden llevar a cabo las contrataciones las cuales son distintas a las tradicionales, celebrados en materia de compraventa de mercadería internacional la cual presenta un respaldo y seguridad jurídica para los Estados parte a través de la Convención de Viena de 1980, el que brega como primacía la Autonomía de la Voluntad al momento de elegir la ley aplicable en materia contractual, conforme lo establecido en en los arts. 6 y 12 de dicha Convención.

Como hemos mencionado, en Europa, el Reglamento Roma I prevé en su art. 4 el modo que se determinará la ley aplicable a falta de elección de las partes. Asimismo, establece subsidiariamente la aplicación de la ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que deba realizar la prestación del contrato, y/o la ley del país con el que presente los vínculos más estrechos.

En los casos en que de acuerdo a las circunstancias es posible afirmar que el contrato “presenta vínculos manifiestamente estrechos con otro país” el Reglamento prevé que el contrato se regirá por la ley aplicable de este otro país.

Reglamentación en el Código Civil y Comercial.

En nuestro ordenamiento jurídico habilita a las partes de un contrato internacional a elegir la ley aplicable que lo regirá. El Código Civil y Comercial en su art. 2651, regula el derecho elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derecho y obligaciones, haciendo mención a ciertos límites impuesto por el legislador, que perjudiquen derecho de terceros o bien, afecten al orden público internacional. El art. 2652 establece que a falta de la elección por las partes determina cuál va a ser la ley aplicable al contrato celebrado.

## Problemática en la celebración

Como hemos mencionado sobre las características de los *Smart Contract*. La inmutabilidad dificultada la posibilidad de corregir el programa ante eventuales falla, y la imposibilidad de modificarlo de ser necesario. Hay que recordar que es un *software* programado por humanos, por lo que pueden presentarte inconvenientes y fallas.

Los Principios de buena fe y razonabilidad propios de los contratos tradicionales no podrán incluirse, ya que no pueden ser programados, y se entienden como tácito por las partes.

Por su parte, el anonimato característico de esta tecnología, deriva en una situación de deslocalización caracterizada por un total desconocimiento de la ubicación de los nodos y de la información contenida en dicha plataforma, por lo

que por definición son internacionales. El anonimato en la contratación podría dar lugar a que un menor de edad o las personas con capacidad restringida celebre un *Smart Contract*, sin impedimento alguno.

Atento la descentralización y la inexistencia de un organismo externo regulador, son los mismos miembros de la plataforma “*blockchain*” los que cotejarán las operaciones celebradas. Ante la falta de un tercero que verifique la identidad de las partes y que reporte “actividad sospechosa”, se deberían construir mecanismos de control que permitan identificar a las partes y detectar oportunamente de las transacciones o transferencias ilegales que sucedan.

## Conclusión

Los *Smart Contracts* suponen una nueva instrumentación de la forma de negociar más rápida, más segura y más precisa. Aún está en sus inicios y eso produce desconfianza, y la falta de regulación provoca indefensión en los usuarios, por lo que es necesaria una labor legislativa que le de sustento jurídico, y proponga soluciones a los desafíos que plantea el *software*, potenciando los beneficios y disminuyendo el riesgo de inconvenientes,

En el marco del MERCOSUR, en relación a la compraventa internacional podemos encontrar el “Protocolo de Buenos Aires” que no hace referencia al caso planteado.

Por lo que proponemos la regulación de

una legislación específica en materia de *Smart Contracts* desde el MERCOSUR, dada las características propias del proceso de integración regional y de su objetivo principal “propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional”.

Proponemos que dicha normativa establezca auditorías de la cadena de algoritmos a los fines de hacer frente a los peligros que pueden acaecer y de esa forma posibilitar la atribución de responsabilidad penal o civil según corresponda cuando se sucedan ilícitos, y/o se pongan a disposición registros públicos para los casos como las compraventas de inmuebles.

A los fines de establecer la ley aplicable, las partes deberían introducir una cláusula específica que refiera a la aplicación de la ley aplicable al país elegido, primando el principio de autonomía de la voluntad pudiendo elegir también el juez arbitral elegido en caso de futuro conflicto.

En caso que implique la ejecución de alguna parte del código algorítmico en la que sean normas diferentes y jurisdicciones en consecuencia, se debe analizar, el lugar suscripto del código, el origen del software, la jurisdicción de los resultados ejecutados por el código.

## Bibliografía

SOBRINO, Waldo, *Contratos, neurociencia*

*ciencias e inteligencia artificial*, La Ley,  
Buenos Aires, 2000.

Código Civil y Comercial de la Nación.

REGLAMENTO (CE) No 593/2008 DEL  
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL  
CONSEJO de 17 de junio de 2008 sobre  
la ley aplicable a las obligaciones  
contractuales (Roma I).

¿Qué es el MERCOSUR? (s.f)  
<https://www.mercosur.int/quienes-somos/en-pocas-palabras/>

Ley Modelo de la Comisión de las  
Naciones Unidas para el Derecho  
Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre  
Comercio Electrónico (1996).

JÓVENES INVESTIGADORES/AS  
POSTER

2022



HUERGO MARCELO - PEDRAZA  
JOSEFINA- ARGENTINA- UNLP  
"Los desafíos de los Smart Contracts."  
Categoría D



Nuestro equipo esta compuesto por Marcelo Huergo y Josefina Pedraza, ambos abogados graduados en la Universidad Nacional de La Plata y ayudantes en la Cátedra II de DIPr.

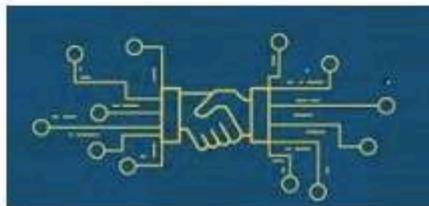
ANALIA CONSOLO

Los smart contracts son programas informáticos de "scripts" (códigos informáticos) escritos con lenguajes de programación que ejecutan acuerdos establecidos entre dos o más partes.. Son capaces de ejecutarse y hacerse cumplir por sí mismo, de manera autónoma y automática, sin intermediarios ni mediadores. La propia red de Blockchain es la que se encarga de hacer cumplir y ejecutar los acuerdos entre las partes interesadas, facilitando la autoejecutabilidad. La tecnología Blockchain existe en una red de computadoras con nodos y usuarios basados en todo el mundo .

**Metodología de la investigación:**  
Estudio del caso, analizando legislaciones Reglamento de roma I, CCCN, UNCITRAL.

Código Civil y Comercial de la Nacion Argentina.  
Reglamento de Roma I.  
Sobrino Waldo. CONTRATOS. NEUROCIENCIAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Año 2020.  
UNCITRAL  
Mercosur. <https://www.mercosur.int/>

Marco Fáctico: En la actualidad, a consecuencia de Internet y otros medios de comunicación cambió la forma en que se comercializan productos y servicios, lo que ha generado ciertos interrogantes respecto de la idoneidad de las normas que rigen el sistema de contratación para solucionar las problemáticas atinentes a estas nuevas formas. El objetivo de este trabajo es demostrar la necesidad de una legislación específica desde el Mercosur para esta nueva forma de contratación, a los fines de brindar seguridad a los usuarios y otorgar validez legal a las transacciones que se instrumenten por intermedio de los Smart Contracts.-



**Características:**  
INMUTABILIDAD  
ANONIMATO Y DESLOCALIZACION  
DESCENTRALIZACION  
AUTOREGULACION

La falta de regulación provoca indefensión en los usuarios, por lo que es necesaria una labor legislativa en materia de Smart Contracts desde el MERCOSUR que les de sustento jurídico bajo la orbita de la Autonomia de la Voluntad y proponga soluciones a los desafíos que plantea el software, potenciando los beneficios y disminuyendo el riesgo de inconvenientes, sin limitar la innovación tecnológica, para así ofrecer una nueva forma de contratación de bienes y servicios de utilidad para la sociedad con los derechos y garantías correspondientes.

- Las imágenes deben respetar las normas de derechos de autor



## **CATEGORÍA E**

**Graduados/as en Derecho  
(hasta 40 años)**

# Las sociedades BIC en América Latina

## Paula Agustina PEREZ NIETO

Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

Directora: Villegas, Candela

Palabras clave: Sociedades BIC, responsabilidad, transparencia, propósito, regulación

### Planteamiento del problema y objetivos

¿Cuáles son los motivos para que exista una regulación del Derecho internacional privado (DIPr) sobre las sociedades BIC?

El objetivo general es conocer las razones por las que el DIPr en Latinoamérica debería regular las sociedades BIC:

Los objetivos específicos son: investigar la regulación de las sociedades BIC en los diferentes países latinoamericanos; describir el rol que juegan las sociedades BIC en estos países, determinar la importancia de una regulación a nivel del DIPr de las sociedades BIC, indagar sobre las circunstancias ambientales que debe afrontar las sociedades BIC.

### Justificación

Se investigará sobre si existen regulaciones del DIPr respecto a las Sociedades BIC ya que hoy en día dichas sociedades juegan un papel protagónico en este mundo globalizado. Esta investigación tiene como propósito indagar sobre la importancia de dichas sociedades y la necesidad de darles un resguardo legal ante hipotéticos conflictos que pudieran surgir.

### Hipótesis

Las Sociedades BIC se encuentran escasamente reguladas en América Latina.

El DIPr cuenta con dificultades para la regulación de las Sociedades BIC.

Las Sociedades BIC son fundamentales en este mundo que hay que afrontar.

El rol en el contexto ambiental que tiene

que afrontar las Sociedades BIC es imprescindible y marca la diferencia respecto a otros tipos de sociedades.

## Marco teórico

Las Sociedades BIC son personas jurídicas con fines de lucro que existen en un ordenamiento jurídico. A diferencia de otros modelos de empresa con propósito y de las personas jurídicas sin fines de lucro, las Sociedades BIC tienen ánimo de lucro y pueden distribuir utilidades a sus accionistas. De las principales características de este modelo consiste en la asignación de un mandato legal por el cual los accionistas y administradores deben procurar un beneficio público simultáneamente con la generación de utilidades. Es decir la existencia de un propósito de beneficio social y ambiental adicional a la actividad económica, la variación del régimen de responsabilidad de la empresa, la obligatoriedad de un régimen de transparencia y reporte.

El objeto de una sociedad comercial como estas, no sería sólo el económico, sino que albergaría un propósito integral mucho más amplio. Esta evolución, se expresa en sus estructuras de gobernanza en los instrumentos constitutivos o en pactos de accionistas. En lo que hace a su regulación las Sociedades BIC en América Latina cuentan con una escasa regulación ya que los únicos países con una legislación aprobada son Ecuador y Colombia. En este último país, según la Ley 1901 las Sociedades BIC ven reflejados sus tres elementos esenciales

la siguiente manera: en cuando a su propósito en su artículo segundo además del beneficio e interés de sus accionistas, estas sociedades actuarán en procura del interés de la colectividad y el ambiente. Incluyendo en su objeto además de los actos de comercio, las actividades de beneficio e interés colectivo. En lo que hace a la responsabilidad el artículo cuarto sostiene que deberán tener en cuenta el interés de la sociedad, el de sus socios o accionistas y el propósito definido en su Estatuto. Y en lo que refiere a su transparencia el artículo quinto se refiere al reporte de gestión público, que deberá ser elaborado por el representante legal dentro del informe de fin de ejercicio, deberá a su vez realizarse de conformidad con un estándar independiente y ser auditado por las autoridades o un tercero.

Hasta fines del 2021 en Colombia existían registradas 10430 Sociedades BIC, y se estimaba para este año en curso alcanzar las 1500 sociedades operando bajo dicho modelo.

Otros países como Chile, Argentina, Uruguay, Perú, cuentan con proyectos de ley sobre dichas sociedades, pero al día de la fecha ninguno ha alcanzado el estado de aprobación. Al igual que en Ecuador y Colombia, en estos países sus proyectos de ley con algunas notas distintivas se basan en la regulación de los tres elementos esenciales de las mismas, es decir propósito, responsabilidad y transparencia.

En lo que hace a que tipo de sociedades pueden ser Sociedades BIC, si bien las leyes existentes como los proyectos de

apuntan a sociedades comerciales, el movimiento denominado sistema B sostiene que su propuesta “no se limita al trabajo de los equipos ejecutivos, sino que apunta a una economía que nos incluya a todos y que pueda crear valor integral para el mundo y la tierra, promoviendo formas de organización económica que puedan ser medidos desde el bienestar de las personas, las sociedades y la tierra, de forma simultánea y con consideraciones de corto y largo plazo” “El modelo de Empresa B contribuye por un lado, a impulsar el ecosistema de innovación social y por otro, a fomentar un cambio de paradigma hacia una economía más inclusiva y más humana, avanzando en un conjunto de prácticas hacia la sustentabilidad de la empresa que incluyen su gobernanza, gestión medio ambiental y modelo de negocio de impacto, así como la incorporación de los intereses de sus empleados y la comunidad”.

Así las cosas, surge el interrogante ¿el DIPr debería ocuparse y regular esta institución a nivel Latinoamericano? ¿O bastaría solo con la regulación existente respecto a las sociedades? Como sabemos, el DIPr en materia societaria tiene como regulación a nivel convencional regional:

- Tratado de Montevideo 1889 sobre derecho internacional privado comercial. Ratificado por Argentina, Perú, Bolivia y Colombia.
- Tratado de Montevideo 1940 sobre derecho internacional privado comercial terrestre. Ratificado por Argentina, Paraguay y Uruguay.
- Convención Interamericana de 1979 sobre conflicto de leyes en materia de Sociedades mercantiles, (CIDIP II)

Ratificado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En la actualidad, si bien los tres se encuentran vigentes, los países ratificantes del Tratado de Montevideo de 1940 sobre derecho internacional privado comercial terrestre, luego han ratificado CIDIP II sobre conflicto de leyes en materia de Sociedades mercantiles, por lo que desarrollé este último.

El principio general que se establece es el reconocimiento de pleno derecho de las sociedades constituidas en todos los estados ratificantes de esta convención, es decir el pleno reconocimiento de la personería jurídica.

En lo que hace a que *lex societatis* que se aplicará la misma queda determinada por la ley del lugar de constitución ergo la existencia, capacidad, fundamento y disolución van a estar establecidos por la ley del lugar donde las sociedades se hayan constituido. Entendiendo por ley del lugar de constitución al lugar donde se cumplen los requisitos de forma y de fondo para el otorgamiento de la personalidad jurídica.

A su vez para la actuación extraterritorial de una sociedad, la misma sigue un criterio cuali-cuantitativo por lo cual si una sociedad quiere realizar actos de capacidad específica quedara sujeto a la *lex societatis* del país donde pretenda realizar el acto.

Desde esta óptica, si bien existe regulación en cuanto a las sociedades, la misma no fue ratificada por la mayoría de los países de Latinoamérica. Y el conflicto surge en el momento de plantearnos, si las Sociedades BIC no

tienen regulación interna en cada uno de los países, agregando que para cierta parte de la doctrina son un tipo de sociedad independiente y para otra parte pueden ser una clase dentro de los tipos sociales ya reconocidos, surge la necesidad de entablar las bases por las cuales deberían caminar estas sociedades, para que en el futuro se evite conflictos derivados de las lagunas normativas con las que se cuenta.

Por otro costado, en lo que hace al rol que tienen estas sociedades para el contexto ambiental, se puede afirmar que la voluntad de contribuir a un cambio social o medio ambiental se encuentra intrínsecamente comprendido en su objeto desde el momento en que estas son concebidas como tales. Bajo esta figura, los temas medio ambientales o sociales son abordados desde la propia empresa brindando soluciones directamente a través de los productos o servicios que presta. La actividad se planifica desde su origen con interés en que la misma se desarrolle con un fin integral que favorezca a sus empleados, a la sociedad y al medio ambiente.

Podría decirse que estas sociedades vienen a dar alguna respuesta a lo aprobado por la Organización de Naciones Unidas a través del Pacto Global la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que llevó el nombre de: "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible". La Agenda 2030 lleva implícito el reconocimiento de que el actual modelo de desarrollo global es insostenible y que para lograr la sustentabilidad se requiere una transformación de la economía global.

Urge adoptar un modelo en donde la sustentabilidad guíe el desarrollo, en el que se reconozca la interdependencia entre los sistemas naturales y sociales, y se construya prosperidad mejorando la calidad de vida, viviendo en equilibrio con la naturaleza.

## Conclusión

En la actualidad el DIPr no cuenta con una regulación sobre Sociedades BIC. El desafío para el futuro debería ser que se encarguen de la regulación de las mismas debido a que tampoco existe legislación interna de los países latinoamericanos al respecto, salvo en Colombia y Ecuador. Personalmente creo en la necesidad de una regulación ya que son sociedades que van tomando día a día más protagonismo, a la par que pueden ser un paso a responder o al menos dar un punta pie a los desafíos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

## Bibliografía

BALDUZZI, Leonardo David, "La persona jurídica societaria para los emprendimientos de triple impacto", *XIV Congreso Argentino de Derecho Societario*, Rosario, 2019

CONNOLLY, Constanza / MUJICA, Juan Diego / FILIPPI, Soledad Noel, *Movimiento legislativo de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (B.I.C.) en América Latina: análisis, desafíos y propuestas para su avance*, s/d., 2020

CRACOGNA, Dante, *El proyecto de ley de*

*sociedades BIC, s/d., 2019*

MARCHISIO, Guillermo, "Empresas de beneficio e interés colectivo. Un nuevo paradigma de actividad empresarial", *X Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa*, Rosario, 2019.

VILLEGAS, Candela, *Las sociedades constituidas en el extranjero en la dimensión interna del Derecho internacional privado societario argentino*, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 2018.

JÓVENES INVESTIGADORES/AS  
POSTER  
2022



Perez Nieto Paula- Argentina- Facultad de Derecho-  
UNC

## **SOCIEDADES BIC EN AMÉRICA LATINA**

Graduados en Derecho



### **Perfil del/ la autor/a**

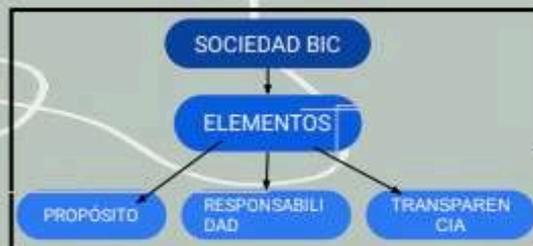
Abogada recibida de la Facultad de Derecho UNC  
Adscripta de la cátedra de Internacional Privado de la misma facultad.  
Asesora legal en estudio jurídico, dedicado a Sociedades, Concursos y Quiebras.

### **Director/a**

Villegas Candela- UNC

### **Hipótesis de trabajo**

-Las Sociedades BIC se encuentran escasamente reguladas en América Latina.  
-El Dipri cuenta con dificultades para la regulación de las Sociedades BIC  
-El rol en el contexto ambiental que tienen que afrontar las Sociedades BIC es imprescindible y marca la diferencia respecto a otros tipos de sociedades



### **Metodología de la investigación:**

La investigación adopta una metodología cualitativa, que busca constatar las razones por las que el dipri convencional debería regular estas sociedades en América Latina.  
La investigación se logró materializar a partir de la búsqueda y análisis de papers, teniendo como base hipótesis descriptivas

### **Bibliografía**

- Leonardo David Balducci. "La persona jurídica societaria para los emprendimientos de triple impacto", 2019
- Constanza Connolly Juan Diego Mujica Filippi Soledad Noel. "Movimiento legislativo de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (B.I.C.) en América Latina: análisis, desafíos y propuestas para su avance", 2020
- Dante Cracogna. "El proyecto de ley de sociedades BIC", 2019

### **Resultados / Reflexiones**

En la actualidad el Dipri no cuenta con una regulación sobre Sociedades BIC. El desafío para el futuro debería ser que se encarguen de la regulación de las mismas debido a que tampoco existe legislación interna de los países Latinoamericanos al respecto, salvo en Colombia y Ecuador. Personalmente creo en la necesidad de una regulación ya que son sociedades que van tomando día a día más protagonismo, a la par que pueden ser un paso a responder o al menos dar un punta pie a los desafíos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

• Las imágenes deben respetar las normas de derechos de autor



## MENCIONES HONORÍFICAS

### Categoría A

1º Mención de honor: Reyna Rosario María (Argentina)

2º Mención de honor: Stefenoni Finamore Simoni Maria Victória / Salazar Davi / Braga Lucas (Brasil)

3º Mención de honor: Zaqui Milagre Amanda (Brasil)

### Categoría B

Mención Honorífica: Medeiros da Costa Ida Geovanna / dos Anjos Barros Livia (Brasil)

### Categoría D

1º Mención de honor: Holanda Prescholdt Gisele (Brasil)

2º Mención de honor: Pedraza Josefina / Huergo Carlos Marcelo (Argentina)



En el siguiente QR se encuentran los videos y posters  
de los/las investigadores/as  
indexados por categoría



ISBN 978-631-00-4889-5



9 7 8 6 3 1 0 0 4 8 8 9 5